

DIARIO DE LOS DEBATES

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

PRESIDENTE

Diputado Alberto Catalán Bastida

Año II Primer Periodo Ordinario LXII Legislatura NUM. 41

SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL MARTES 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUMARIO

ASISTENCIA Pág. 03

ORDEN DEL DÍA Pág. 03

COMUNICADOS

- Oficio signado por el senador Primo Dothé Mata, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del expediente de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. (Minuta que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 16 de diciembre de 2019) Pág. 06

Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos:

- Oficio suscrito por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Mesa directiva del Honorable Congreso de la Unión, con el que remite el acuerdo por el que la Cámara de

Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su legislación en materia penal para que el cómputo de la prescripción de los delitos cometidos contra menores de edad inicie a partir de que la víctima cumpla 30 años Pág. 07

- Oficio signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, a fin de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables Pág. 07

- Oficio suscrito por la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con el que hace de su conocimiento el punto de acuerdo para exhortar muy respetuosamente a todos los Congresos Locales, así como a los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales de las diversas entidades del País para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades promuevan las iniciativas necesarias para que las mujeres que se encuentran

- privadas de su libertad por haber abortado, sean amnistiadas, así como para que se revisen los casos en donde la clasificación del delito fue por homicidio y no por aborto **Pág. 07**
- Oficio signado por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que exhorta para que, en el Presupuesto de Egresos de este Honorable Congreso apruebe para el ejercicio 2020, establezca los recursos suficientes a las entidades encargadas de llevar a cabo la reparación integral en favor de las víctimas. (Oficio que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 11 de diciembre de 2019) **Pág. 07**
 - Oficio suscrito por la diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con el que remite el tercer informe trimestral de actividades correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 julio de 2019 **Pág. 07**
 - Oficio signado por la diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con el que remite el cuarto informe trimestral de actividades correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de octubre de 2019 **Pág. 07**
 - Oficio suscrito por la diputada Perla Edith Martínez Ríos, Presidenta de la Comisión de Protección Civil, mediante el cual remite informe trimestral correspondiente al periodo septiembre-octubre-noviembre 2019, del segundo año de ejercicio constitucional de actividades de la citada comisión **Pág. 07**
 - Oficio signado por el magistrado Paulino Jaimes Bernardino, con el que comunica su designación como magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de fecha 03 de

diciembre 2019 hasta la primera semana del mes de diciembre de 2020 **Pág. 07**

- Oficio suscrito por los ciudadanos Adela Román Ocampo y Ernesto Manzano Rodríguez, presidenta y secretario general del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el que remiten el acuerdo expedido por el cuerpo edilicio del citado Ayuntamiento, con base en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Hacienda, respecto a la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, con la finalidad de establecer el 14 de febrero del Ejercicio Fiscal que corresponda, como fecha límite para que los ayuntamientos aprueben sus respectivos Presupuestos de Egresos **Pág. 07**
- Oficio signado por el ciudadano Francisco Cano Alonso, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecoaapa, Guerrero, con el cual solicita la intervención de este Honorable Congreso, para que se actúe conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en virtud de que el ciudadano Raúl Prudencio Marín, regidor propietario se ha ausentado desde hace dos meses de sus labores en el citado Ayuntamiento **Pág. 08**
- Oficios enviados por Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación; de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Honorable Congreso del Estado de Hidalgo; y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con los cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Legislatura **Pág. 08**

INICIATIVAS

- De decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos de los pueblos y comunidades originarias y/o indígenas. Suscrita por los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y por los diputados Blanca Celene Armenta Piza, Marco Antonio Cabada Arias, Carlos Cruz López, Mariana Itallitzin García Guillén, Perla Xóchitl García Silva, Zeferino Gómez Valdovinos, Antonio Helguera Jiménez, Norma Otilia Hernández Martínez, Arturo Martínez Núñez, Ossiel Pacheco Salas, Adalid Pérez Galeana, Teófila Platero Avilés, Moisés Reyes Sandoval, Alfredo Sánchez Esquivel, J. Jesús Villanueva Vega y Luis Enrique Ríos Saucedo. Solicitando hacer uso de la palabra

Pág. 08

PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS Y PROPOSICIONES DE ACUERDOS

- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos

Pág. 34

INTERVENCIONES

- De la diputada Erika Valencia Cardona, con relación a la ola de violencia que se vive en la región de la Montaña

Pág. 39

CLAUSURA Y CITATORIO

Pág. 40

**Presidencia
Diputado Alberto Catalán Bastida**

ASISTENCIA

Solicito a la diputada secretaria Perla Xóchitl García Silva, informe el número de diputadas y diputados que ya registraron su asistencia, mediante el Sistema Electrónico.

La secretaria Perla Xóchitl García Silva:

Con gusto, diputado presidente.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 23 diputados y diputadas mediante el

Sistema Electrónico y vía Secretaría 1 diputado, haciendo un total de 24 asistencias de diputadas y diputados.

Servido, diputado presidente.

Cesáreo Guzmán Celestino, Flores Majul Omar Jalil, Ríos Saucedo Luis Enrique, Hilario Mendoza Nilsan, Villanueva Vega J. Jesús, Catalán Bastida Alberto, Ortega Jiménez Bernardo, Tito Arroyo Aristóteles, Pacheco Salas Ossiel, Monzón García Eunice, Cruz López Carlos, Quiñonez Cortés Manuel, García Silva Perla Xóchitl, Rafael Dircio Fabiola, Armenta Piza Blanca Celene, López Sugia Arturo, Huicochea Vázquez Heriberto, González Suástegui Guadalupe, Hernández Flores Olaguer, Mosso Hernández Leticia, Pérez Galeana Adalid, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Mora Eguiluz Celeste.

Y vía secretaria el diputado Ayala Rodríguez Cervando. Haciendo un total de veinticuatro asistencias

El Presidente:

Muchas gracias, secretaria.

Esta Presidencia solicita se informe si algún diputado o diputada falta de registrar su asistencia favor de hacerlo antes de declarar cerrado el registro de asistencias, mediante el Sistema Electrónico, para tal efecto se otorgarán 30 minutos.

Asimismo esta Presidencia informa que si algún diputado o diputada falta de registrar su asistencia, mediante el Sistema Electrónico y desea hacerlo a través de la Secretaria de la Mesa Directiva, puede realizarlo en este momento.

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para faltar a la presente sesión, previa justificación la diputada Samantha Arroyo Salgado y para llegar tarde Héctor Apreza Patrón y el diputado Zeferino Gómez Valdovinos

Con fundamento en el artículo 131, fracción II de la ley que nos rige y con la asistencia de 24 diputadas y diputados, se declara quórum legal y válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen; por lo que siendo las 12 horas con 18 minutos del día Martes 17 de Diciembre de 2019, se inicia la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me

permiso proponer el siguiente proyecto de Orden del Día, por lo que solicito al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, dar lectura al mismo.

El secretario Olaguer Hernández Flores:

Con gusto, diputado presidente.

Orden del Día.

Primero. Comunicados:

a) Oficio signado por el senador Primo Dothé Mata, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del expediente de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. (Minuta que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 16 de diciembre de 2019).

b) Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos:

I. Oficio suscrito por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Mesa directiva del Honorable Congreso de la Unión, con el que remite el acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su legislación en materia penal para que el cómputo de la prescripción de los delitos cometidos contra menores de edad inicie a partir de que la víctima cumpla 30 años.

II. Oficio signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, a fin de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

III. Oficio suscrito por la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con el que hace de su conocimiento el punto de acuerdo para exhortar muy respetuosamente a todos los Congresos Locales, así como a los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales de las diversas entidades del País para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades promuevan las iniciativas necesarias para que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad por haber abortado, sean amnistiadas, así como para que se revisen los casos en donde la clasificación del delito fue por homicidio y no por aborto.

IV. Oficio signado por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que exhorta para que, en el Presupuesto de Egresos de este Honorable Congreso apruebe para el ejercicio 2020, establezca los recursos suficientes a las entidades encargadas de llevar a cabo la reparación integral en favor de las víctimas. (Oficio que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 11 de diciembre de 2019)

V. Oficio suscrito por la diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con el que remite el tercer informe trimestral de actividades correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 julio de 2019.

VI. Oficio signado por la diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con el que remite el cuarto informe trimestral de actividades correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de octubre de 2019.

VII. Oficio suscrito por la diputada Perla Edith Martínez Ríos, Presidenta de la Comisión de Protección Civil, mediante el cual remite informe trimestral correspondiente al periodo septiembre-octubre-noviembre 2019, del segundo año de ejercicio constitucional de actividades de la citada comisión.

VIII. Oficio signado por el magistrado Paulino Jaimes Bernardino, con el que comunica su designación como magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de fecha 03 de diciembre 2019 hasta la primera semana del mes de diciembre de 2020.

IX. Oficio suscrito por los ciudadanos Adela Román Ocampo y Ernesto Manzano Rodríguez, presidenta y secretario general del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el que remiten el acuerdo expedido por el cuerpo edilicio del citado Ayuntamiento, con base en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Hacienda, respecto a la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, con la finalidad de establecer el 14 de febrero del Ejercicio Fiscal que corresponda, como fecha límite para que los ayuntamientos aprueben sus respectivos Presupuestos de Egresos.

X. Oficio signado por el ciudadano Francisco Cano Alonso, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecoaapa, Guerrero, con el cual solicita la intervención de este Honorable Congreso, para que se actúe conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en virtud de que el ciudadano Raúl Prudencio Marín, regidor propietario se ha ausentado desde hace dos meses de sus labores en el citado Ayuntamiento.

XI. Oficios enviados por Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación; de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Honorable Congreso del Estado de Hidalgo; y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con los cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Legislatura.

Segundo. Iniciativas:

a) De decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de derechos de los pueblos y comunidades originarias y/o indígenas. Suscrita por los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y por los diputados Blanca Celene Armenta Piza, Marco Antonio Cabada Arias, Carlos Cruz López, Mariana Itallitzin García Guillén, Perla Xóchitl García Silva, Zeferino Gómez Valdovinos, Antonio Helguera Jiménez, Norma Otilia Hernández Martínez, Arturo Martínez Núñez, Ossiel Pacheco Salas, Adalid Pérez Galeana, Teófila Platero Avilés, Moisés Reyes Sandoval, Alfredo Sánchez Esquivel, J. Jesús Villanueva Vega y Luis Enrique Ríos Saucedo. Solicitando hacer uso de la palabra.

Tercero. Proyectos de Leyes, Decretos y Propositiones de Acuerdos:

a) Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.

Cuarto. Clausura:

a) De la sesión.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Martes 17 de diciembre de 2019.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado secretario.

Esta Presidencia solicita al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, informe que diputadas y diputados se integraron a la sesión durante el transcurso de la lectura del Proyecto de Orden del Día.

El secretario Olaguer Hernández Flores:

Con gusto, diputado presidente.

Se informa a la Presidencia que se registraron 12 asistencias de las diputadas y diputados vía Sistema Electrónico, con lo que se hace un total de 36 asistencias de diputadas y diputados a la presente sesión.

Servido, diputado presidente.

El Presidente:

Gracias, diputado secretario.

Con fundamento en el artículo 55 párrafo III y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se somete a consideración de la Plenaria para su aprobación el proyecto de Orden del Día de antecedentes...

(Desde su curul la diputada Erika Valencia Cardona, solicita se agregue una intervención, en relación a la ola de violencia que se vive en la Región de La Montaña)

El Presidente:

Si diputada lo someteremos a votación en estos momentos y pediría que lo hiciera llegar de manera escrita a esta Presidencia, entonces compañeras

diputadas y diputados, vamos a votar de manera económica, poniéndonos de pie:

El Orden del Día en estos momentos y después daremos paso a la votación a la propuesta que hace la diputada.

Con fundamento en el artículo 55 párrafo III y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se somete a consideración de la Plenaria para su aprobación el proyecto de Orden del Día de antecedentes, sírvanse manifestarlo en votación económica, poniéndose de pie:

A favor.

En contra.

Abstenciones.

No han entregado el Orden del Día a las diputadas y diputados, yo les pediría entonces por favor si no es un Orden del Día consensado por la Junta de Coordinación, es el que se mandó...

Se aprueba por Mayoría de votos, el Orden del Día en referencia y damos paso a la solicitud de la diputada Erika Valencia Cardona, que solicita una intervención respecto al tema de la ola de violencia en La Región de La Montaña, diputados les pido sírvanse manifestarlo en votación económica, poniéndose.

A favor.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por Mayoría de votos que sea integrado en el proyecto del Orden del Día la intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, respecto a la violencia que se vive en la Región de La Montaña, diputados y diputadas sírvanse manifestarlo en votación económica, poniéndose de pie:

A favor.

Diputados secretarios les pido por favor hagan el conteo del mismo, por favor ponerse de pie, los que estén a favor de la intervención de la diputada Erika Valencia Cardona.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos, la intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, respecto a la ola de violencia...

Si diputada ¿con qué objeto?

...(Desde sus escaño la diputada)...

El Presidente:

Si diputada ahorita lo revisaremos, porque esas son las firmas que vienen en la propuesta de iniciativa por eso ahorita lo revisamos con Servicios Parlamentarios, pero nada tiene que ver la presentación de su intervención, o sí.

Ahorita revisamos por qué no está su nombre en el resumen de la iniciativa diputada, gracias.

COMUNICADOS

En desahogo del primer punto del Orden del Día, Comunicados, inciso "a" solicito a la diputada secretaria Perla Xóchitl García Silva, dé lectura al oficio signado por el por el senador Primo Dothé Mata, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

La secretaria Perla Xóchitl García Silva:

Con gusto, diputado presidente.

Ciudad de México, 06 de Diciembre de 2019.

Diputado Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero.

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted expediente que contiene proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.

Atentamente.

Senador Primo Dothé Mata, secretario.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente:

Gracias, diputada secretaria.

Esta Presidencia hace del conocimiento que la minuta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y

Jurídicos en términos del artículo 242 último párrafo, así como los efectos de lo dispuesto 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 16 de diciembre del 2019.

En desahogo del inciso “b” del Primer Punto del Orden del Día, solicito al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, dé lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios.

El secretario Olaguer Hernández Flores:

Con gusto, presidente.

Área: Secretaría de Servicios Parlamentarios.

Asunto: Se informa recepción de Comunicados.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Martes 17 de Diciembre del 2019.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado.- Presentes.

Por este medio informo a ustedes que se recibieron en esta Secretaría de Servicios Parlamentarios los siguientes Comunicados:

I. Oficio suscrito por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, Vicepresidenta de la Mesa directiva del Honorable Congreso de la Unión, con el que remite el acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su legislación en materia penal para que el cómputo de la prescripción de los delitos cometidos contra menores de edad inicie a partir de que la víctima cumpla 30 años.

II. Oficio signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, a fin de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

III. Oficio suscrito por la diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con el que hace de su conocimiento el punto de acuerdo para exhortar muy respetuosamente a todos los Congresos Locales, así como a los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales de las diversas entidades del País para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades promuevan las iniciativas necesarias para que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad por haber abortado, sean amnistiadas, así como para que se revisen los casos en donde la clasificación del delito fue por homicidio y no por aborto.

IV. Oficio signado por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que exhorta para que, en el Presupuesto de Egresos de este Honorable Congreso apruebe para el ejercicio 2020, establezca los recursos suficientes a las entidades encargadas de llevar a cabo la reparación integral en favor de las víctimas. (Oficio que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 11 de diciembre de 2019)

V. Oficio suscrito por la diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con el que remite el tercer informe trimestral de actividades correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 julio de 2019.

VI. Oficio signado por la diputada Celeste Mora Eguiluz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, con el que remite el cuarto informe trimestral de actividades correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de octubre de 2019.

VII. Oficio suscrito por la diputada Perla Edith Martínez Ríos, Presidenta de la Comisión de Protección Civil, mediante el cual remite informe trimestral correspondiente al periodo septiembre-octubre-noviembre 2019, del segundo año de ejercicio constitucional de actividades de la citada comisión.

VIII. Oficio signado por el magistrado Paulino Jaimes Bernardino, con el que comunica su designación como magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de fecha 03 de diciembre 2019 hasta la primera semana del mes de diciembre de 2020.

IX. Oficio suscrito por los ciudadanos Adela Román Ocampo y Ernesto Manzano Rodríguez, presidenta y secretario general del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el que remiten el acuerdo expedido por el cuerpo edilicio del citado Ayuntamiento, con base en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Hacienda, respecto a la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, con la finalidad de establecer el 14 de febrero del Ejercicio Fiscal que corresponda, como fecha límite para que los ayuntamientos aprueben sus respectivos Presupuestos de Egresos.

X. Oficio signado por el ciudadano Francisco Cano Alonso, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecoaapa, Guerrero, con el cual solicita la intervención de este Honorable Congreso, para que se actúe conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en virtud de que el ciudadano Raúl Prudencio Marín, regidor propietario se ha ausentado desde hace dos meses de sus labores en el citado Ayuntamiento.

XI. Oficios enviados por Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación; de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Honorable Congreso del Estado de Hidalgo; y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con los cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Legislatura.

Escrito que agrego al presente, para los efectos conducentes.

Atentamente.
El Secretario de Servicios Parlamentarios.
Licenciado Benjamín Gallegos Segura.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, diputado secretario.

Esta Presidencia turna los asuntos de antecedentes de la siguiente manera:

Apartado I, A las Comisiones Unidas de Justicia, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para su conocimiento y efectos procedentes.

Apartado II, A la Comisión de Justicia, para su conocimiento y efectos procedentes.

Apartado III, A las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos procedentes.

Apartado IV, Oficio que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231 el día 11 de diciembre del 2019.

Apartado V, VI, VII, Esta Presidencia toma conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos legales conducentes y désele difusión por los Medios Institucionales.

Apartado VIII, Se toma conocimiento, para los efectos conducentes.

Apartado IX, A las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales, y Jurídicos, de Asuntos Políticos y Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos procedentes.

Apartado X, A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos procedentes.

Apartado XI, Se toma nota y remítase copia a los diputados promoventes, para su conocimiento y efectos procedentes.

INICIATIVAS

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, iniciativas, inciso "a" se concede el uso de la palabra al diputado Aristóteles Tito Arroyo, hasta por un tiempo de 10 minutos.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo:

Diputados y Diputadas de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Medios de Comunicación.

Amigos todos.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 65, fracción I; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23, fracción I; 227, 228, 229 y 231 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231; la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos con el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena, sometemos, a consideración del Pleno del Honorable

Congreso del Estado de Guerrero, el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Sección II de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y los artículos 171, 172, 173, 174, 176 del Título décimo Municipio Libre, Sección I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A manera de prólogo, esta iniciativa lleva como principal contexto el reconocimiento que en materia política y jurídica existe como una deuda histórica con los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afrodescendientes del mundo; estas condiciones son motivo suficiente para que así lo hayan reconocido las Naciones Unidas, sobre todo en la última década; he aquí algunos aspectos importantes:

Primero. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre de 2007, donde afirma que todos los pueblos son parte de la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, además sostiene que los pueblos indígenas deben ser libres de toda forma de discriminación, reconoce los derechos que tienen y que no han podido ejercer; como la libre determinación mencionada en su artículo tercero: “Los pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición y persiguen libremente su desarrollo económico, social, político y cultural”.

Así mismo, el derecho a la consulta acorde a las realidades que enfrentan en el siglo XXI en materia económica, cultural, ecológica, política y social, que es mencionado en la misma Declaración en el artículo diecinueve:

La misma Declaración contiene una serie de derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas como pueblos distintos, como subrayan la legislación y la jurisprudencia internacional. Se trata entonces por ejemplo del derecho conexo sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, de los que depende el disfrute de toda la gama de sus derechos humanos, en donde establece la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el instrumento internacional de Derechos Humanos más avanzado y amplio que existe sobre esos

pueblos; junto con los tratados y convenciones internacionales, constituyen el principal marco jurídico de protección hacia estas personas para hacerlos sujetos de derechos.

Segundo. El Informe de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizado en el año 2017.

En consecuencia el Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, considera fundamental el vínculo entre la pobreza en todas sus dimensiones y la violación del derecho a la libre determinación. Es también esencial tener en cuenta el carácter central de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos para garantizar el disfrute de todos sus derechos humanos. Destacando que ha habido más progresos en la adopción de medidas relacionadas con determinados derechos sociales y culturales que en los relativos al reconocimiento efectivo y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas al autogobierno y a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Tercero. El Informe Especial del relator y visitador de la Organización de las Naciones Unidas Rodolfo Steinhilber, realizado en el año 2003 durante su estancia en nuestro país, dio cuenta sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, donde menciona que estos tipos de procesos exigen un clima de confianza y mutuo respeto entre el Estado y los indígenas, por lo que “el procedimiento consultivo en sí mismo debe ser resultado del consenso”. Además de recomendar al Congreso de la Unión a reabrir el debate sobre una posible reforma constitucional en materia indígena donde efectivamente se establezca lo pactado en los Acuerdos de San Andrés, fijando con esto una firme postura de la inexistente normatividad en favor de los derechos en materia indígena, apegada a los principios internacionales.

Cuarto. El Estado Mexicano ha suscrito y ratificado diversos convenios internacionales (78 de los 188 adoptados por la OIT); entre ellos, el Convenio 169, donde reconoce el derecho de los pueblos indígenas a constituirse y a preservar sus formas de organización y sus culturas; así como el derecho a la consulta cuando se prevean medidas que les afecten directamente y el derecho a poseer y trabajar sus tierras y territorios, por lo tanto forman parte de nuestro sistema jurídico. Recordándonos, los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación en todos sus tipos.

Quinto. La Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce los derechos de los pueblos como un aspecto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas; aporta grandes avances en el desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, por lo tanto existe compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus derechos y su identidad cultural.

Este instrumento internacional dispone en sus artículos III y VI el derecho a la libre determinación y derecho colectivo respectivamente, para que los pueblos indígenas gocen de bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este tenor, los Estados deberán de reconocer y respetar su actuar colectivo, sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos, sus propias culturas, creencias espirituales, lenguas e idiomas, tierras, territorios y recursos.

Bajo estas premisas, la propia declaración sirve de sustento para el establecimiento de la Policía Comunitaria y demás instituciones comunitarias que realizan labores de coordinación y colaboración en los usos y sistemas normativos, reforzado en los preceptos siguientes:

Sexto. A nivel nacional, diversos órganos jurisdiccionales han emitido varias posiciones en relación a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; prueba de ello: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto diferentes criterios en relación a respetar las prácticas tradicionales en la vida comunitaria y a no ser observadas como contrarias a la Constitución ni a los Derechos Humanos; las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sus diferentes sentencias en materia indígena, han ordenado a los institutos electorales y legislaciones estatales a respetar, armonizar y priorizar los derechos políticos-electorales y de libre determinación y autonomía de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido diferentes recomendaciones a las legislaturas estatales para que armonicen sus legislaciones en relación a la protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Séptimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de

Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, donde se menciona que “la libre determinación de los pueblos indígenas no puede poner en riesgo la unidad nacional, pero sí implica ‘la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional [sic].”

Recientemente el 21 de noviembre del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado en el cual se menciona el reconocimiento por primera vez de la jurisprudencia especial indígenas en materia penal:

Octavo. Hablando de la autoadscripción, se debe de retomar la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su expediente SUP-JDC-61/2012, el cual retoma un precedente en la aplicación de las disposiciones que rigen en el derecho indígena del sistema jurídico nacional, de donde parte el criterio subjetivo de autoadscripción.

Como antecedente y mandato judicial con carácter de obligatorio hacia el Congreso del Estado para que legisle en relación a la materia indígena, se tiene la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, con número de expediente 402/2018, en el capítulo de efectos menciona que: “Al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que, de acuerdo a su agenda legislativa y al menos noventa días antes del inicio del siguiente proceso electoral ordinario local, armonice su Constitución local y la legislación interna a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos indígenas, por cuanto hace a garantizar su acceso en condiciones de igualdad sustantiva a las candidaturas para los cargos de elección popular en la entidad, debiendo implementar acciones afirmativas a su favor, que coadyuven en la materialización de la participación efectiva de las personas indígenas en los aludidos cargos de elección popular.

Al respecto de lo anterior y sin que pase desapercibido se indica que cuando se prevean medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, se deben involucrar lo antes posible en el proceso de decisión, según se desprende de los artículos 1 y 2 Apartado B, de la Constitución, en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Presidente, le solicito unos minutos más, ojalá sea posible.

El Presidente:

Adelante, diputado tiene cinco minutos más por favor.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo:

Considerandos

a) Que en el año 1987, mediante la reforma propugnada por el otrora gobernador José Francisco Ruiz Massieu, existe el primer antecedente de incorporación de los Pueblos Indígenas al texto constitucional, que recayó en el contenido del artículo décimo, mismo que para el caso que nos ocupa en su contexto señalaba lo siguiente:

Artículo 10.- Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en su Territorio. Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia y en el marco de la Constitución General de la República y de la Constitución Política del Estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales.

En otras palabras, esta era la visión proyectiva en materia de derecho positivo que ponderaba el marco legal de referencia hacia los pueblos y comunidades indígenas que les proporcionaba identidad constitucional en el Estado de Guerrero.

b) Que en el año 2014, mediante la reforma constitucional integral propugnada por el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero existe el antecedente de reconocimiento de los Pueblos Indígenas y en particular al Afromexicano, que incurrió en la creación de una nueva sección denominada "De los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos"

Que el día 21 de mayo del 2017, se celebró en la comunidad de Renacimiento tlapaneco, municipio de Iliatenco, en la asamblea general de la coordinadora regional de autoridades comunitarias, policía comunitaria a la que asistieron, representaciones de organizaciones sociales entre ellas el Consejo de Comunidades damnificadas de la Montaña, colectivo indígena que el día 25 de enero del 2017 presentó, formalmente ante el Congreso del Estado su iniciativa popular Ley en General sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos del Estado de

Guerrero en el marco de la reforma y armonización de la Ley número 701.

De reconocimiento de derechos y culturas de los pueblos y comunidades indígenas con la Constitución Política del Estado de Guerrero, en la citada asamblea general de la CRAC y las representaciones de organizaciones sociales, se acordó convocar a los diputados y diputadas del partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena, para que expusieran ante las autoridades comunitarias sus proyectos de reforma a la 701 y a la Constitución Política local en relación a los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, lo anterior ante la pretensión predeterminada del gobernador del Estado de desaparecer el texto constitucional a la Policía Comunitaria y Rural.

d) Que en el año 2018, mediante la reforma propugnada por el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, incurre en un desconocimiento constitucional al remitir la iniciativa con proyecto de decreto de fecha 21 de agosto de 2018, mediante la cual reformo el Artículo 14.

e) Que en enero del año 2019, los representantes de las organizaciones sociales y pueblos originarios y/o indígenas y afromexicanos, junto con el acompañamiento de los diputados de morena, plantearon la necesidad de desarrollar un Parlamento Abierto.

De la cual se otorgaron las siguientes propuestas:

a) Reconocimiento pleno a la autonomía y libre determinación de los pueblos, así como a elegir a sus autoridades de acuerdo a su sistema normativo propio.

b) El reconocimiento de la Asamblea como la máxima institución en la toma de decisiones de las comunidades.

c) El reconocimiento del Pluralismo Jurídico, entendido como el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación; en donde se establezca su condición política, económica, social, cultural, educativa y las formas de gobierno que emanen de las asambleas y/o instituciones que determinen ellos.

d) El reconocimiento expreso de los pueblos Nahuas, Na' Savi, Me'phaa, Nn'a'ncue Ñomdaa y el Pueblo Afromexicano y el reconocimiento oficial de sus lenguas.

e) El reconocimiento de la jurisdicción indígena para la aplicación de sus propios sistemas normativos para la regulación y solución de sus conflictos, reconociendo a

sus órganos de sus sistemas comunitarios encargados de la procuración e impartición de justicia.

f) A ser consultados de buena fe, de manera directa, libre, previa, informada y con pertinencia cultural; mediante procedimientos apropiados a través de sus asambleas e instituciones representativas; cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o de desarrollo susceptibles de afectarles.

g) El derecho a la participación plena en la integración del presupuesto.

h) A reconocerles la educación basadas en la composición multicultural, intercultural, multiétnica y plurilingüe.

i) Reconocer el derecho al acceso de la educación pública y gratuita, en donde los estudiantes de los pueblos originarios tengan acceso directo a las licenciaturas que ofertan las universidades públicas del Estado, así como el derecho a obtener becas, un primer empleo a los egresados del nivel medio superior, superior y posgrados; debiendo fomentar el emprendimiento.

j) La creación del Instituto Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas.

k) La creación y reconocimiento de las instituciones representativas en el sistema educativo, emanadas de los pueblos y comunidades originarios y/o indígenas y afromexicano.

l) La enseñanza de las lenguas de los pueblos originarios junto al español en las instituciones educativas de todos los niveles, lo cual será obligatoria.

m) Se reconozcan a todas las autoridades electas por la comunidad, en los municipios y en los distritos electorales.

n) El reconocimiento del municipio indígena y/o afromexicano y de la figura del diputado indígena y afromexicano.

o) El reconocimiento pleno de las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia de los pueblos y comunidades originarias y/o indígenas y afromexicanas.

p) El reconocimiento del derecho a participar en la integración de los órganos de gobierno del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de los organismos autónomos en el Estado.

q) Se garantice servicios de salud adecuados, con pertinencia cultural y acorde a la realidad comunitaria, respetando y fortaleciendo la medicina tradicional y alternativa, reconociendo a los médicos y parteras con sus prácticas tradicionales.

r) Se garantice el uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales, en la forma y con las modalidades establecidos en los tratados y convenios internacionales.

s) A la protección, recuperación, conservación, preservación, restauración, registro, promoción, difusión e investigación; para el reconocimiento y uso de su patrimonio cultural tangible e intangible, natural y mixto.

t) Garantizar a los pueblos originarios el diseño, adquisición, operación y administración de los medios de comunicación y sistemas de radiocomunicación.

u) A ejercer el derecho de audiencia pública a las autoridades Estatales y Municipales.

v) Garantizar la vivienda digna y decorosa, así como los espacios múltiples para la convivencia y recreación de las comunidades de los pueblos originarios y/o indígenas y afromexicano.

w) El estado reconozca y garantice las acciones que implementen los pueblos originarios dentro de su jurisdicción; la impartición de justicia, seguridad pública, prevención del delito y reeducación de los detenidos, sujetos a sus sistemas normativos, prácticas tradicionales y/o reglamento interno, lo cual se funda en el reconocimiento pleno del Pluralismo Jurídico y en el respeto a la *jurisdicción y autonomía de los pueblos*.

Estos son algunos, entre otros, de los derechos fundamentales que deben de ser reconocidos en la Constitución Política del Estado de Guerrero y que van contemplados en el planteamiento de forma de los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 171, 172, 173, 174 y 175.

Es cuanto, diputado presidente, le agradezco su tolerancia.

Versión Intgra

Ciudadanos Diputados y Diputadas de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 65, fracción I; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23, fracción I; 227, 228, 229 y 231 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231; la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos sometemos, a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Sección II de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y los artículos 171, 172, 173, 174, 176 del Título décimo Municipio Libre, Sección I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A manera de prólogo, esta iniciativa lleva como principal contexto el reconocimiento que en materia política y jurídica existe como una deuda histórica con los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afrodescendientes del mundo; estas condiciones son motivo suficiente para que así lo hayan reconocido las Naciones Unidas, sobre todo en la última década; he aquí algunos aspectos importantes:

Primero. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre de 2007¹, donde afirma que todos los pueblos son parte de la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, además sostiene que los pueblos indígenas deben ser libres de toda forma de discriminación, reconoce los derechos que tienen y que no han podido ejercer; como la libre determinación mencionada en su artículo tercero: “Los pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición y persiguen libremente su desarrollo económico, social, político y cultural”.

Así mismo, el derecho a la consulta acorde a las realidades que enfrentan en el siglo XXI en materia económica, cultural, ecológica, política y social, que es mencionado en la misma Declaración en el artículo diecinueve: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los Pueblos Indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

La misma Declaración contiene una serie de derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los

pueblos indígenas como pueblos distintos, como subrayan la legislación y la jurisprudencia internacional. Se trata entonces por ejemplo del derecho conexo sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, de los que depende el disfrute de toda la gama de sus derechos humanos, en donde establece la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el instrumento internacional de Derechos Humanos más avanzado y amplio que existe sobre esos pueblos; junto con los tratados y convenciones internacionales, constituyen el principal marco jurídico de protección hacia estas personas para hacerlos sujetos de derechos.

Segundo. El Informe de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizado en el año 2017, en donde enumera diversas cuestiones obtenidas durante las actividades realizadas el año próximo pasado; basados en la experiencia de su mandato y contextualizadas del estado de aplicación de la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

- El aumento en varias regiones del acaparamiento de tierras a gran escala, que provoca graves violaciones de los derechos humanos y ataques directos contra dirigentes indígenas y miembros de las comunidades que intentan defender sus derechos sobre la tierra. Las personas indígenas son amenazadas, detenidas y enjuiciadas y en situaciones extremas, se convierten en víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

- Los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos a la tierra y sus recursos, debido a la demora injustificada en los procedimientos legales existentes y su ineficacia para acceder a la justicia, en particular cuando están involucrados derechos de terceros. En consecuencia el acceso a la justicia sigue siendo difícil para estos pueblos debido a los problemas que enfrentan para hacer efectivo su acceso a los sistemas de justicia y además por la falta de reconocimiento adecuado de sus propias leyes consuetudinarias y su jurisdicción.

- El mantenimiento de las propias instituciones jurídicas y normas consuetudinarias de los pueblos indígenas es un aspecto esencial de su derecho a la libre determinación. Varios países han reconocido a nivel nacional las funciones jurisdiccionales indígenas. Sin

¹ <https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-Declaracion-Pueblos-Indigenas.pdf>

embargo, a pesar de que se reconoce cada vez más el valor del derecho consuetudinario y de los sistemas de justicia indígenas y se ha avanzado un tanto hacia el pluralismo jurídico, sigue cuestionándose la aplicación de su jurisdicción. Queda mucho por hacer en términos del reconocimiento y armonización con los sistemas nacionales de justicia; por lo que es fundamental que haya un diálogo intercultural y un entendimiento entre las autoridades del Estado y las de justicia indígena, que tomen en consideración sus buenas prácticas.

En consecuencia el Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, considera fundamental el vínculo entre la pobreza en todas sus dimensiones y la violación del derecho a la libre determinación. Es también esencial tener en cuenta el carácter central de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos para garantizar el disfrute de todos sus derechos humanos. Destacando que ha habido más progresos en la adopción de medidas relacionadas con determinados derechos sociales y culturales que en los relativos al reconocimiento efectivo y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas al autogobierno y a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Tercero. El Informe Especial del relator y visitador de la Organización de las Naciones Unidas Rodolfo Stevenhagen, realizado en el año 2003 durante su estancia en nuestro país, dio cuenta sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, donde menciona que estos tipos de procesos exigen un clima de confianza y mutuo respeto entre el Estado y los indígenas, por lo que “el procedimiento consultivo en sí mismo debe ser resultado del consenso”. Además de recomendar al Congreso de la Unión a reabrir el debate sobre una posible reforma constitucional en materia indígena donde efectivamente se establezca lo pactado en los Acuerdos de San Andrés, fijando con esto una firme postura de la inexistente normatividad en favor de los derechos en materia indígena, apegada a los principios internacionales.

Cuarto. El Estado Mexicano ha suscrito y ratificado diversos convenios internacionales (78 de los 188 adoptados por la OIT); entre ellos, el Convenio 169, donde reconoce el derecho de los pueblos indígenas a constituirse y a preservar sus formas de organización y sus culturas; así como el derecho a la consulta cuando se prevean medidas que les afecten directamente y el derecho a poseer y trabajar sus tierras y territorios, por lo tanto forman parte de nuestro sistema jurídico. Recordándonos, los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación en todos sus tipos.

Por lo que considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; tal y como lo cita el artículo segundo del Convenio 169 de la OIT que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, -económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Quinto. La Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce los derechos de los pueblos como un aspecto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de las Américas; aporta grandes avances en el desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, por lo tanto existe compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus derechos y su identidad cultural.

Este instrumento internacional dispone en sus artículos III y VI el derecho a la libre determinación y derecho colectivo respectivamente, para que los pueblos

indígenas gocen de bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este tenor, los Estados deberán de reconocer y respetar su actuar colectivo, sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos, sus propias culturas, creencias espirituales, lenguas e idiomas, tierras, territorios y recursos.

Bajo estas premisas, la propia declaración sirve de sustento para el establecimiento de la Policía Comunitaria y demás instituciones comunitarias que realizan labores de coordinación y colaboración en los usos y sistemas normativos, reforzado en los preceptos siguientes:

Artículo XXI. Derecho a la autonomía o al autogobierno:

1. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas;

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.

Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos²;

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional;

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en la jurisdicción de cada Estado,

² Como se viene tratando en el cuerpo de la presente iniciativa, se contaba con el reconocimiento constitucional de la Policía Comunitaria en el artículo 14 de la Constitución del Estado, sin embargo, al emitirse el decreto de reforma 756, se elimina el reconocimiento constitucional de la Policía Comunitaria, lo cual viola a la luz de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al no permitir mantener estructuras institucionales, existiendo un retroceso en el reconocimiento dentro del sistema jurídico y constitucional de un cuerpo comunitario que ya contaba con arraigo y representación en las comunidades indígenas y pueblos afroamericanos, aunado a la contravención en la convencionalidad de la autodeterminación establecida en el orden jurídico nacional, internacional y regional.

serán conducidos de manera tal de proveer el derecho a los indígenas de plena *representación con dignidad e igualdad ante la ley*. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos y culturales.

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas, para asegurar la implementación de este artículo.

Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Sexto. A nivel nacional, diversos órganos jurisdiccionales han emitido varias posiciones en relación a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericano; prueba de ello: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto diferentes criterios en relación a respetar las prácticas tradicionales en la vida comunitaria y a no ser observadas como contrarias a la Constitución ni a los Derechos Humanos; las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sus diferentes sentencias en materia indígena, han ordenado a los institutos electorales y legislaciones estatales a respetar, armonizar y priorizar los derechos políticos-electorales y de libre determinación y autonomía de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido diferentes recomendaciones a las legislaturas estatales para que armonicen sus legislaciones en relación a la protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas.

Séptimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de

Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas³, donde se menciona que “la libre determinación de los pueblos indígenas no puede poner en riesgo la unidad nacional, pero sí implica ‘la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional [sic].”

Recientemente el 21 de noviembre del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado en el cual se menciona el reconocimiento por primera vez de la jurisprudencia especial indígenas en materia penal:

“LA PRIMERA SALA RESUELVE POR PRIMERA OCASIÓN CONTROVERSIA SOBRE APLICACIÓN DE JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA.”

La primera sala determinó que corresponde a la jurisdicción especial indígena la resolución del conflicto, esto al derivar de un hecho acontecido entre personas de una comunidad indígena, en un territorio que corresponde a dicho pueblo, el cual cuenta con autoridades tradicionales que ejercen su autoridad en un ámbito territorial específico; con base en sus usos y prácticas tradicionales existentes, tanto en lo sustantivo como en lo procesal; y, que esos usos y prácticas no resultan contrarios a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección, previstos en la Constitución e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.

De este modo, en estricto cumplimiento a la obligación Constitucional y Convencional de promover, respetar, proteger y garantizar la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Comunidades Indígenas, específicamente de reconocer sus sistemas normativos internos para la solución de conflictos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimo correcto que la sala de justicia indígena ordenara tanto al Ministerio Público como al Juez Penal que se inhibieran de conocer el caso”.

En relación a lo expuesto, es conveniente mencionar que se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal, por ser el órgano encargado de garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permiten el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la objetividad, honestidad,

profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, a instruir a sus Jueces y Magistrados a observar en sus determinaciones el marco jurídico internacional en materia de sistemas normativos indígenas, evitando invadir su esfera jurídica, reconociendo sus prácticas en la solución de sus conflictos, dejando de restringir las garantías constitucionales en la aplicación de su autonomía y libre determinación.

Octavo. Hablando de la autoadscripción, se debe de retomar la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su expediente SUP-JDC-61/2012, el cual retoma un precedente en la aplicación de las disposiciones que rigen en el derecho indígena del sistema jurídico nacional, de donde parte el criterio subjetivo de autoadscripción por los propios actores como integrantes de una comunidad indígena (purépechas), en una perspectiva garantista considere sus particulares condiciones y necesidades, lo cual tiene sustento legal en los artículos 2º, párrafo tercero de la Constitución federal; así como el artículo 1º, párrafo segundo del Convenio 169; y el artículo 9º de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en relación con el precedente del expediente SUP-JDC-61/2012, 12-3.

Como antecedente y mandato judicial con carácter de obligatorio hacia el Congreso del Estado para que legisle en relación a la materia indígena, se tiene la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos políticos–electorales del ciudadano, con número de expediente 402/2018, en el capítulo de efectos menciona que: “Al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que, de acuerdo a su agenda legislativa y al menos noventa días antes del inicio del siguiente proceso electoral ordinario local, armonice su Constitución local y la legislación interna a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos indígenas, por cuanto hace a garantizar su acceso en condiciones de igualdad sustantiva a las candidaturas para los cargos de elección popular en la entidad, debiendo implementar acciones afirmativas a su favor, que coadyuven en la materialización de la participación efectiva de las personas indígenas en los aludidos cargos de elección popular.

Al respecto de lo anterior y sin que pase desapercibido se indica que cuando se prevean medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, se deben involucrar lo antes posible en el

³ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas*, consultable en la página electrónica: https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocoloIndigenasDig.pdf

proceso de decisión, según se desprende de los artículos 1 y 2 Apartado B, de la Constitución, en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, tal como se señala en la Tesis LXXXVII/2015 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS

Novena. la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales electorales estatales e Institutos Electorales pertenecientes a la Primera circunscripción, emitieron la DECLARACIÓN DE GUADALAJARA, reconociendo los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en donde entre otras cosas asumieron el compromiso de cumplir lo siguiente:

a) Actuar con altura de miras, en forma conjunta tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales, en unidad en beneficio de México y la democracia;

b) Maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y, en consecuencia, minimizar en su autogobierno la intervención externa de autoridades electorales locales y federales;

c) Identificar el derecho indígena aplicable en el marco del respeto al pluralismo jurídico, esto es, las normas, principios, instituciones y características propias de los pueblos y comunidades que no necesariamente corresponden al derecho legislado.

d) Generar y difundir mediante los mecanismos disponibles, incluidas las redes sociales, información accesible y clara del trabajo que se desarrolla institucionalmente, tanto en español como en las lenguas indígenas habladas tanto por comunidades originarias como migrantes en la circunscripción, con miras a una difusión y actuación jurisdiccional multilingüe, en los términos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México.

d) Propiciar que las controversias se resuelvan, en la medida de lo posible, por las propias comunidades y privilegiando el consenso legítimo y no sólo fáctico en la comunidad.

e) Realizar una interpretación culturalmente sensible, considerando el contexto en el que se desarrollan las comunidades indígenas al momento de interpretar o definir el contenido de sus derechos.

Décimo. Al respecto de la materia medular de esta iniciativa se tiene a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encarga de la supervisión, la no violación y el respeto al Derecho Humano consagrado en el artículo primero constitucional, la cual desde su perspectiva como órgano de control ha emitido diversas recomendaciones, que versan desde la implementación de iniciativas que propugnen por el derecho a “asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas”, así como también girar instrucciones para que se lleven a cabo los mecanismos necesarios en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal para generar la normativa legal que garantice aspectos en materia política, de seguridad pública y electoral previa consulta con las comunidades; remitiendo a este Órgano la acreditación de su cumplimiento.

Bajo estas premisas se enumeran las siguientes recomendaciones:

I. Recomendación número 9/2016 sobre la situación de la policía comunitaria de Olinalá, en el Estado de Guerrero, la detención de diversos integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, así como de la detención de personas por parte de esa Policía Comunitaria. (2016)

“ÚNICA. Valorar las observaciones realizadas en el apartado IV.3.4 OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN LAS FUENTES NORMATIVAS, a efecto de elaborar y presentar las iniciativas de ley y de reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, que definan como mínimo a) una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y b) el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.”

II. Recomendación no. 15VG/2018 “Caso Iguala” (2018)

A la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero:

Primera. Girar instrucciones para que se lleven a cabo los trabajos legislativos a que haya lugar, para que, en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, se genere la normativa para garantizar la seguridad pública en las poblaciones y comunidades, respetando y reconociendo su autonomía y autodeterminación como grupos indígenas. Remitir a este Organismo Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Analizar las condiciones de seguridad pública en que se encuentran los municipios del Estado de Guerrero y se tomen las medidas que, conforme a sus atribuciones, permitan restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad en esa entidad federativa, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Tercera. Se considere dentro de la normatividad que regula a los partidos políticos (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero), establecer requisitos mínimos de honorabilidad, capacidad, origen de los recursos y experiencia política para la selección de aspirantes a puestos de elección popular.

III. Recomendación General no. 35 Sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana. (28/01/2019)

A los Ejecutivos Locales y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

ÚNICA. Se presente una iniciativa de ley al respectivo Congreso Local, sobre la creación o armonización de un ordenamiento jurídico que establezca un Sistema interinstitucional, para garantizar el reconocimiento colectivo y la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, que integre como mínimo los elementos que han sido expuestos en esta Recomendación, previa participación de los pueblos y comunidades indígenas del país.

A los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas:

Primera. Se estudie, diseñe, discuta y vote, la iniciativa que, en su caso, presente el titular del ejecutivo estatal respectivo, y/o alguno de los grupos parlamentarios al interior de los congresos locales, que contemple la creación de un ordenamiento jurídico que establezca el reconocimiento colectivo, así como el conjunto de medidas necesarias para garantizar la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo

integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas que integre como mínimo los elementos que han sido expuestos en el texto de esta Recomendación.

Segunda. Se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas realizando foros de consulta y participación de las mismas durante el procedimiento legislativo y la creación del Sistema.

Considerandos

a) Que en el año 1987, mediante la reforma propugnada por el otrora gobernador José Francisco Ruiz Massieu, existe el primer antecedente de incorporación de los Pueblos Indígenas al texto constitucional, que recayó en el contenido del artículo décimo, mismo que para el caso que nos ocupa en su contexto señalaba lo siguiente:

ARTICULO 10.- Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en su Territorio. Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia y en el marco de la Constitución General de la República y de la Constitución Política del Estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los pueblos indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de sus manifestaciones culturales.

En otras palabras, esta era la visión proyectiva en materia de derecho positivo que ponderaba el marco legal de referencia hacia los pueblos y comunidades indígenas que les proporcionaba identidad constitucional en el Estado de Guerrero.

b) Que en el año 2014, mediante la reforma constitucional integral propugnada por el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero existe el antecedente de reconocimiento de los Pueblos Indígenas y en particular al Afromexicano, que incurrió en la creación de una nueva sección denominada "De los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos" reformándolo para quedar como sigue:

SECCIÓN II DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

Artículo 8. El Estado de Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural en sus pueblos originarios indígenas particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como en sus comunidades afromexicanas.

Artículo 9. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afroamericanos, atendiendo en todo momento a los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Instrumentos Internacionales en la materia e incorporados al orden jurídico nacional.

Artículo 10. La conciencia de la identidad indígena o afroamericana deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones relativas a dicha pertenencia.

Artículo 11. Se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural;

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional y legal;

III. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades políticas o representantes, y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos;

IV. Acceder al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales en la forma y con las modalidades prescritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que puedan ser objeto de despojo alguno, o de explotación mediante entidades públicas o privadas ajenas a los mismos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. En caso de consentimiento, tendrán derecho a una parte de los beneficios y productos de esas actividades;

V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; y,

VI. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, tomando en consideración sus usos, costumbres y demás especificidades culturales, bajo la asistencia de traductores, intérpretes y defensores calificados para tales efectos.

Artículo 12. La educación de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas será laica, gratuita, de calidad, con pertinencia lingüística e intercultural. El Estado garantizará el acceso, permanencia y eficiencia

terminal a los estudiantes indígenas y afroamericanos, implementando un sistema de becas. El Estado generará las condiciones de acceso al primer empleo de los egresados de su sistema educativo, conforme lo determine la ley de la materia.

En las instituciones de educación indígena la enseñanza de las lenguas de los pueblos indígenas y del español será obligatoria.

Artículo 13. El Gobierno del Estado en coordinación con las autoridades municipales y conforme a las disposiciones presupuestales que apruebe el Congreso, generará el cúmulo de políticas públicas que promuevan el acceso a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas, que tiendan a eliminar cualquier práctica discriminatoria y posibiliten el avance socioeconómico y el desarrollo humano. Las obligaciones que corresponda a cada uno de los poderes del Estado, se determinarán en una Ley Reglamentaria atendiendo a lo prescrito en el artículo 2 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas se incorporarán acciones afirmativas en general a todos los guerrerenses y, en particular, en favor de los grupos vulnerables de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas: mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, para su plena incorporación al desarrollo humano, social y económico. Los recursos presupuestales destinados a éstos grupos se focalizará y su fiscalización será prioritaria. El Estado establecerá las medidas necesarias para la protección y el acceso a la salud de las mujeres y niñas de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas atendiendo, principalmente, a su salud sexual y reproductiva, proveyendo lo necesario en los aspectos de enfermedades infecto contagiosas y maternidad

Artículo 14.- El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad

Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación.

c) Que el día 21 de mayo de 2017, se celebró en la comunidad de Renacimiento Tlapaneco, municipio de Iliatenco, la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), a la que asistieron representaciones de organizaciones sociales, entre ellas, el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña (CCDM), colectivo indígena que el día 25 de enero de 2017 presentó formalmente ante el Congreso del Estado su Iniciativa Popular: Ley Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado Guerrero, en el marco de la reforma y armonización de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Ley 701) con la Constitución Política del Estado de Guerrero. En la citada asamblea general de la CRAC-PC y las representaciones de organizaciones sociales, se acordó convocar a los diputados y diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que expusieran ante las autoridades comunitarias, sus proyectos de reforma a la Ley 701 y a la Constitución Política local, en relación a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Lo anterior, ante la pretensión premeditada del gobernador del Estado de desaparecer del texto constitucional a la Policía Comunitaria y rural.

Con fecha 04 de junio de 2017, tuvo lugar en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, la segunda asamblea general de la CRAC-PC y las organizaciones sociales afines a la defensa de los derechos indígenas. A esa concentración de policías y autoridades comunitarias se apersonaron los diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC), Ociel Hugar García Trujillo (del PRD y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Poder Legislativo) y la diputada María de Jesús Cisneros Martínez (Morena), quienes dieron a conocer el contenido y alcance de sus respectivas Iniciativas de reforma constitucional, y se comprometieron públicamente a respaldar e impulsar durante el proceso legislativo la propuesta de reforma que construyan coordinadamente la CRAC-PC, el Consejo de Comunidades Damnificadas, las organizaciones sociales y los diputados y diputadas de las fracciones y representaciones parlamentarias del PRD, MC y Morena. Así también, los referidos diputados y la diputada asumieron el compromiso formal de promover y cabildear la propuesta conjunta de Iniciativa de reforma constitucional con los legisladores de los demás partidos políticos (PRI, PAN, PVEM, etc.).

Finalmente, se acordó que en un plazo de 15 días se reunirían el grupo de trabajo de revisión legislativa (Conformada por la CRAC-PC, el Consejo de Comunidades Damnificadas, CECOP, Tlachinollan y otras organizaciones sociales afines) y los legisladores comparecientes, para afinar una sola propuesta de Iniciativa de reforma constitucional que retome las portaciones de ambas partes. Previo al encuentro, la comisión comunitaria de revisión legislativa se reuniría internamente durante los días 09, 10, 16 y 17 de junio del 2017 para diseñar su propio proyecto de reforma en la materia.

Sin embargo, la propuesta fue considerada bajo reserva, sin que tuviera ningún ejercicio de dictaminación al respecto de la misma, convirtiéndose el documento en letra muerta.

d) Que en el año 2018, mediante la reforma propugnada por el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, incurre en un desconocimiento constitucional al remitir la iniciativa con proyecto de decreto de fecha 21 de agosto de 2018, mediante la cual reformo el Artículo 14, quedando de la siguiente manera:

“La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afroamericanos apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afroamericana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.

Haciendo con esto que el Sistema de procuración e impartición de justicia quedara sometido de manera vulnerada al Sistema Estatal de Seguridad Pública y convirtiéndose así a la Policía Comunitaria en auxiliares de la Seguridad Pública del Estado, ocasionando así que los Pueblos y Comunidades perdieran todos sus derechos políticos y legales en materia de seguridad pública.

f) Que en enero del año 2019, los representantes de las organizaciones sociales y pueblos originarios y/o indígenas y afromexicanos, junto con el acompañamiento de los diputados de morena, plantearon la necesidad de desarrollar un Parlamento Abierto.

El cual se realizó en cuatro sesiones, con igual número de mesas de trabajo divididos en dos grupos, este ejercicio se desarrolló bajo la coordinación de la

Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; durante las fechas de 3, 14, 31 de mayo y 14 de junio del 2019.

g) Como resultado del ‘Parlamento’, la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos acordó realizar diez foros de consulta en los meses de septiembre y octubre del año 2019, mismos que se llevaron a cabo en los siguientes sedes: El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres; Metlatónoc, Tlapa de Comonfort, Paraje Montero, municipio de Malinaltepec; San Luis Acatlán, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, Caxitepec, municipio de Acatepec; Xalitla, municipio Tepecoacuilco y Acapulco.

Los criterios sobre los que se consultó fueron los siguientes:

1- Principios para el reconocimiento de la diversidad:

MULTICULTURALISMO, PLURICULTURALIDAD, PLURILINGÜISMO Y PLURINACIONAL,

2.- Libre Determinación y Autonomía de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [:]

a) Reconocimiento a la forma de elección e integración del Autogobierno.

b) Facultades de las [sic] Asamblea General de Pueblos Indígenas y Afromexicano.

c) Consejo de Gobierno y Consejo de Ancianos.

d) Representación igualitaria en los Órganos de Gobierno de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [.]

e) La Revocación de Mandato y evaluación de los Gobiernos Indígenas y Afromexicano, por sus Asambleas [sic].

f) Municipios Indígenas y Afromexicanos.

g) Distritos Locales Indígenas y Afromexicano [sic].

h) Cambio de régimen.

i) Marco Jurídico del Municipio Indígena y Afromexicano.

3.- Pueblos Indígenas y Afromexicano, Autoadscripción e Identidad de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

a) Conceptualización de Pueblo Originario y/o Pueblo Indígena.

b) Conceptualización sobre Pueblo Afromexicano [.]

4.- Cultura e Identidad. [sic]

a) Lengua y Cultura.

b) Difusión y promoción de la Cultura, Lengua y Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

5.- Sistemas Normativos Indígenas, Jurisdicción Indígena y Estado. [sic]

a) Pluralismo Jurídico.

b) Penas alternativas, Indulto y Amnistía a los procesados Indígenas o Afromexicanos por el Sistema Jurídico común.

5.1 Seguridad Pública (reconocimiento de los Cuerpos de Seguridad Comunitaria).

6.- Efectivo acceso a la Jurisdicción del Estado. [sic]

a) Procuración, impartición, administración de justicia y reinserción social por parte de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano.

b) No discriminación.

c) Acciones afirmativas de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [sic].

d. Garantía de petición y Audiencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [sic]

7.- Tierra, Territorio y Recursos Naturales.

8.- Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Guerrero. [sic]

a) Propuesta de Iniciativa de la Diputada Leticia Mosso Hernández, sobre Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Guerrero [sic].

9.- Derecho a una Educación Indígena, Multicultural y Plurilingüe. [sic]

a) Educación Intercultural y Bilingüe.

b) Creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas y Afromexicano [.]

b.1 Propuesta de Iniciativa del Diputado Arturo López Sugja para la Creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas [sic].

b.2 Propuesta de Iniciativa del Diputado Aristóteles Tito Arroyo para la Creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas y Afromexicano.

10.- Derecho al Desarrollo. [sic]

a) Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [sic].

b) Derecho a la Salud y Vivienda de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [sic].

c) Economía solidaria.

11. Derecho al acceso a Medios de Comunicación, y Radiodifusión Indígena y afromexicana. [sic]

a) Sistemas de Radios Culturales Indigenistas y afromexicanas [sic]

b) Radios Comunitarias.

c) Radios Indígenas y afromexicanas

11.1 Derecho para transmitir mensajes Comunitarios y Sociales.

11.2 Radio y Televisión Comunitaria.

12.-Propiedad intelectual, Ciencia, Conocimiento, Tradiciones, Símbolos y Vestimenta. [sic]

a) Tipificación de la responsabilidad de las empresas que se apropien de manera indebida sobre el patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. En relación a la recomendación General No 35, Sobre la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana [sic].

13.- Participación y Representación Política. [sic]

a) Derecho a contar con Representación de los Pueblos Indígenas y Afromexicano en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como [en] Organismos Autónomos del Estado.

b) Los Comisarios como cuarto orden de Gobierno.

14.- Nueva Institucionalidad y Políticas Públicas. [sic]

a) Origen, participación, interpretación y operación en las Instituciones del Estado que promueve los Derechos

de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [sic].

b) Acceso a los Recursos y Presupuestos para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano [sic] con un enfoque de Presupuesto Participativo.

15.- Derechos de la Mujer Indígena y Afromexicana desde la Perspectiva de Género. [sic]

a) Derecho Sexual y Reproductivo [:]

a.1) Propuesta de Iniciativa de ley para prevenir la trata de personas en pueblos originarios presentada por la Diputada Erika Valencia Cardona. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género [sic].

b) Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género.

c) Participación Política en Órganos de Gobierno.

16.- Derechos de los Migrantes y otros sectores vulnerables. [sic]

a) Derecho de los Jornaleros Agrícolas, migración interna e internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

b) Derecho de la Niña, Niño y Adolescente Indígena.

17. Reconocimiento del Parlamento Abierto en materia Indígena y Afromexicano [sic] en el Proceso Legislativo.

Dichos foros se realizaron de manera libre, previa e informada, para la conformación del Proyecto de Reforma Constitucional y Legal en relación a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero.

De los foros se obtuvieron las siguientes propuestas:

x) El reconocimiento pleno de la Autonomía y libre determinación de los Pueblos, así como a elegir a sus autoridades de acuerdo a sus sistemas normativos propios.

y) El reconocimiento de la Asamblea como la máxima institución en la toma de decisiones de las comunidades.

z) El reconocimiento del Pluralismo Jurídico, entendido como el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación; en donde se establezca su condición política, económica, social, cultural, educativa y las formas de gobierno que emanen de las asambleas y/o instituciones que determinen ellos.

aa) El reconocimiento expreso de los pueblos Nahuas, Na' Savi, Me'phaa, Nn'a'ncue Ñomdaa y el Pueblo Afromexicano y el reconocimiento oficial de sus lenguas.

bb) El reconocimiento de la jurisdicción indígena para la aplicación de sus propios sistemas normativos para la regulación y solución de sus conflictos, reconociendo a sus órganos de sus sistemas comunitarios encargados de la procuración e impartición de justicia.

cc) A ser consultados de buena fe, de manera directa, libre, previa, informada y con pertinencia cultural; mediante procedimientos apropiados a través de sus asambleas e instituciones representativas; cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o de desarrollo susceptibles de afectarles.

dd) El derecho a la participación plena en la integración del presupuesto.

ee) A reconocerles la educación basadas en la composición multicultural, intercultural, multiétnica y plurilingüe.

ff) Reconocer el derecho al acceso de la educación pública y gratuita, en donde los estudiantes de los pueblos originarios tengan acceso directo a las licenciaturas que ofertan las universidades públicas del Estado, así como el derecho a obtener becas, un primer empleo a los egresados del nivel medio superior, superior y posgrados; debiendo fomentar el emprendimiento.

gg) La creación del Instituto Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas y Afromexicanas.

hh) La creación y reconocimiento de las instituciones representativas en el sistema educativo, emanadas de los pueblos y comunidades originarios y/o indígenas y afromexicano.

ii) La enseñanza de las lenguas de los pueblos originarios junto al español en las instituciones educativas de todos los niveles, lo cual será obligatoria.

jj) Se reconozcan a todas las autoridades electas por la comunidad, en los municipios y en los distritos electorales.

kk) El reconocimiento del municipio indígena y/o afromexicano y de la figura del diputado indígena y afromexicano.

ll) El reconocimiento pleno de las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia de

los pueblos y comunidades originarias y/o indígenas y afromexicanas.

mm) El reconocimiento del derecho a participar en la integración de los órganos de gobierno del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de los organismos autónomos en el Estado.

nn) Se garantice servicios de salud adecuados, con pertinencia cultural y acorde a la realidad comunitaria, respetando y fortaleciendo la medicina tradicional y alternativa, reconociendo a los médicos y parteras con sus prácticas tradicionales.

oo) Se garantice el uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales, en la forma y con las modalidades establecidos en los tratados y convenios internacionales.

pp) A la protección, recuperación, conservación, preservación, restauración, registro, promoción, difusión e investigación; para el reconocimiento y uso de su patrimonio cultural tangible e intangible, natural y mixto.

qq) Garantizar a los pueblos originarios el diseño, adquisición, operación y administración de los medios de comunicación y sistemas de radiocomunicación.

rr) A ejercer el derecho de audiencia pública a las autoridades Estatales y Municipales.

ss) Garantizar la vivienda digna y decorosa, así como los espacios múltiples para la convivencia y recreación de las comunidades de los pueblos originarios y/o indígenas y afromexicano.

tt) El estado reconozca y garantice las acciones que implementen los pueblos originarios dentro de su jurisdicción; la impartición de justicia, seguridad pública, prevención del delito y reeducación de los detenidos, sujetos a sus sistemas normativos, prácticas tradicionales y/o reglamento interno, lo cual se funda en el reconocimiento pleno del Pluralismo Jurídico y en el respeto a la jurisdicción y autonomía de los pueblos.

Estos son algunos, entre otros, de los derechos fundamentales que deben de ser reconocidos en la Constitución Política del Estado de Guerrero.

h) Que con la propuesta del artículo 8 de la presente iniciativa tiene por objeto hacer válida la eficacia de establecer derechos para los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afromexicanas, sustentado en la existencia de los mismos en nuestro sistema jurídico y consuetudinario.

La Asamblea, como máxima institución en la toma de decisiones de las comunidades, tendrá facultad para el reconocimiento y adscripción de sus lenguas, tradiciones e identidades culturales, sociales y políticas; además, validará la libre determinación de acuerdo a las condiciones de pertenencia de cada comunidad; esto a su vez hace sostenibles la regulación y solución de sus conflictos internos.

i) Que para la redacción del artículo 9 de esta iniciativa se tiene en cuenta la importancia de la Asamblea Comunitaria para reconocer, en un primer momento, a la autoadscripción; la cual al tener consideraciones de autoridad máxima dentro de los pueblos otorgará la legitimidad de las personas para ocupar cargos de representación popular.

Esta figura brinda de manera vanguardista las condiciones legales y transparentes para las comunidades, al ser representadas en materia electoral en su territorio; dejando a un lado la problemática de selección de manera insidiosa que influye como factores externos de una cultura propiamente de los grupos políticos, que tradicionalmente hacen valer su interés como condición.

j) Que para el contenido del artículo 10 de esta iniciativa se tomó en cuenta la importancia jurídica y política del derecho a la libre determinación y autonomía de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano; resultantes de una cultura ancestral que brinda para los mismos un contexto plural en sus usos y costumbres y que, para el caso que nos ocupa en esta propuesta, es menester que la Constitución local lo reconozca como factor para el ejercicio previo y efectivo de sus derechos.

k) Que para conformar el contexto del artículo 11 se tiene en consideración diversos factores en materia de derecho indígena y afromexicano, pues en ello se implementó la esencia de las formas de gobierno que por uso gozan de manera interna, además, se hizo hincapié en el fortalecimiento y desarrollo de sus sistemas normativos para la regulación y solución de sus conflictos sin violentar el derecho humano.

Cabe destacar que el contenido de este artículo está imbuido de política jurídica vanguardista, como lo es la perspectiva de género en el tema de la elección de autoridades de manera paritaria; así también, la regulación de aspectos consistentes en la evaluación al desempeño de sus autoridades, incluyendo a la figura de revocación de mandato, garantizando para la persona implicada el derecho de audiencia así como el de ofrecimiento de pruebas.

Otro aspecto no menos importante es el que tiene que ver con el uso y disfrute de sus tierras, que por tradición constitucional descansa en el histórico artículo 27 de nuestra Carta Magna; pues en este artículo de esta propuesta de iniciativa se abarcan aspectos que se relacionan con el cuidado, tal como lo indican los tratados internacionales, así como sus usos y costumbres, respetando la integridad de sus tierras, territorios, medio ambiente, hábitat y recursos naturales para su preservación y conservación.

En otro orden de ideas, el tópico relacionado con mantener la esencia de la cultura y de la lengua de los pueblos es otra característica que definirá al artículo décimo primero, pues, además de lo anterior, se estará ponderando a la igualdad para el ejercicio y disfrute de sus derechos, mediante un respeto a la jerarquía jurídica de los mecanismos de acceso, así como a los principios generales de esta Constitución; pues en ello, el Estado y los municipios garantizarán la soberanía de los pueblos para el ejercicio de su normatividad de manera individual y colectiva, dado que el libre albedrío será un factor legítimo para sancionar desde la perspectiva del Estado o de la jurisdicción comunitaria.

Una condición innovadora para el ejercicio político de los pueblos deriva desde señalado en el artículo segundo, fracción novena de la Constitución federal, el cual señala una característica preponderante: la consulta; misma que recoge una condición y es que los pueblos deben ser cuestionados en términos de sus derechos de buena fe. Pues al respecto, la participación ciudadana será una acción medular para la integración de los organismos administrativos como los del Estado, ya que las personas interesadas gozarán del ejercicio de su derecho de audiencia y de petición; así como a no ser discriminados de ninguna forma.

Así mismo hay que destacar la visión política del Primer Mandatario al brindar aspectos legales que antes sólo recaían en derecho del ámbito federativo; pues en esta propuesta se pondera que los pueblos tendrán acceso a la administración de los sistemas de comunicación, siendo éstos digitales o de otro tipo, siempre y cuando, se respete el marco legal constitucional, pues en ello, interviene la protección de su propio patrimonio cultural y la conservación de sus saberes y conocimientos ancestrales, así como a la difusión de su propiedad intelectual.

Finalmente, la participación de los pueblos en materia de políticas públicas, así como en la elección y composición de los ayuntamientos y en la integración del Congreso del Estado de Guerrero, recaerá en sus mismos derechos, pues para ello el Estado coadyuvará

en la organización plena para una consulta efectiva en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas, acciones y proyectos en beneficio de las comunidades originarias y/o indígenas y afromexicanas.

l) Que en lo considerado en el artículo 12 se toma en cuenta la reforma educativa de fecha 15 de mayo de 2019, donde se señala que la educación de todos los niveles estará basamentada en la composición multicultural, intercultural, multiétnica y plurilingüe; misma que conserva los postulados tradicionales de ser laica, gratuita, obligatoria, integral, científica y humanista; garantizando así el respeto a la diversidad social y cultural de los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afromexicanas.

En tal virtud, la condición primordial en materia educativa será la de que los pueblos podrán coordinarse con los organismos e instituciones públicas educativas, para el diseño y desarrollo de instituciones y programas educativos, así como de sus libros de texto gratuitos, materiales didácticos y demás estrategias pedagógicas acorde a su cosmovisión y herencia cultural e histórica.

m) Que en lo expresado en el artículo 13 están considerados los mecanismos de interacción entre los pueblos y el Estado en sus tres niveles de gobierno, por conducto de sus propias instituciones representativas de toma de decisiones, como es la Asamblea Comunitaria; a fin de obtener su consentimiento libre, previo, informado, de buena fe y con pertinencia cultural. En caso de que no se obtenga la autorización de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, las partes interesadas se desistirán de continuar con el o los proyectos respectivos, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas y penales por desacato y violación a esta Constitución.

Ahora bien, el Estado, los ayuntamientos y las autoridades comunitarias celebrarán consultas a los pueblos, con el fin de crear e integrar una propuesta de presupuesto; mismo que podrá presentarse al Congreso del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo en atención a los planes y programas propuestos. En cuanto a la aplicación de recursos etiquetados de la Federación, se hará en coordinación con los pueblos y las autoridades federales, estatales, municipales e institucionales.

Cabe señalar que en todo momento se atenderá a la perspectiva de género para que en materia de salud se respete y fortalezca a la medicina tradicional y alternativa a través del reconocimiento de parteras y médicos tradicionales con sus respectivas prácticas ancestrales; quienes se podrán complementar, emplear y

remunerar en las instituciones de salud comunitaria y estatal.

n) Para contextualizar el artículo 14 se consideraron diversos aspectos donde el Estado reconoce las acciones que implementen los pueblos originarios a través de sus instituciones comunitarias y de su jurisdicción en la impartición de justicia, mediación, seguridad pública, prevención del delito y reeducación de los detenidos. elprácticas tradicionales y/o reglamento interno. La relación de cooperación y coordinación se establecerá entre los Sistemas Normativos Internos y el sistema jurídico ordinario, fundada en el reconocimiento pleno del pluralismo jurídico y en el respeto a la jurisdicción y autonomía de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano. El seguimiento de la misma relación se dará a través de sus propias autoridades.

o) Finalmente, como se expresa en el segundo párrafo del Artículo 8° de la presente propuesta de iniciativa, la Asamblea como una Institución propia de los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afromexicanas, es la máxima autoridad en la toma de decisiones como colectividad y deliberadora, bajo esta premisa, en los Municipios Indígenas y Afromexicanos, donde su forma de organización sea diferente al habitual ayuntamiento occidental, será la propia asamblea, quien dentro de sus atribuciones, decida la forma de estructura, los requisitos para formar parte de esta estructura, el tiempo de duración de las personas quienes sean electas por sistema normativo propio de las Comunidades, el día en el tendrán su propia elección y toma de protesta.

p) En esta línea, se plantea y se justifica adiciones a los artículos de la sección décima Municipio Libre de nuestra Constitución local.

En el artículo 171, se reconoce que, dentro del Estado, la estructura de gobierno, el gobierno y la gobernanza se ejercerá mediante los ayuntamientos, Concejos Municipales y las formas de gobierno que decidan formar la Asamblea Comunitaria (como parte de su atribución). Esto con el fin de que se le dote de libertad a los pueblos de denominar a su forma de gobierno libremente y sin imposiciones del derecho ordinario y/o legislado.

El día de instalación de las estructuras de gobierno comunitario se instalarán el día que la asamblea así lo haya decidido.

La administración pública municipal comunitaria se conformará y se organizará a lo establecido por la

asamblea, como parte de la libre determinación de la cual gozan los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano.

El artículo 172, reconoce, además de las figuras de autoridad tradiciones de los ayuntamientos, a las autoridades comunitarias que sean electas por sistemas normativos propios de los Pueblos, esto para no dejar sin la protección y reconocimiento constitucional de estas figuras de autoridad de los municipios indígenas que decidan elegir a los integrantes de la estructura de gobierno mediante sistemas normativos propios. Así mismo, en materia de seguridad pública, se deja abierto a lo establecido en el artículo 14 de la presente iniciativa, para que la seguridad pública de los Municipios que se rijan por Sistemas Normativos, y en este entendido, la seguridad esté a cargo de las propias autoridades encargadas de la administración, procuración e impartición de justicia, quienes a lo establecido en el artículo antes referido, serán designados por la misma asamblea comunitaria.

El artículo 173, no podrá ser impositivo para los municipios que tengan el carácter de ser indígenas o afromexicanos y que además adopten el modo de elección por sistemas normativos propios, por lo que los requisitos para formar parte de las estructuras de gobierno municipal comunitaria, tendrá que ser establecidos por la propia asamblea.

El artículo 174, reconoce la elección de los municipios por sistemas normativos propios y así mismo, el día que decida la asamblea comunitaria de que tomaran posesión los integrantes de la estructura de gobierno municipal comunitario de los Municipios Indígenas y/o Afromexicanos.

El artículo 176 expresa el reconocimiento que se le ha dotado a la asamblea para que decida, dentro de su facultad, el día en que las autoridades comunitarias asumirán el cargo por el que fueron electos por medio del Sistema Normativo Propio así como el tiempo en el que durarán a cargo del mismo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso el Estado la presente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Sección II de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y del Título décimo, Municipio Libre, Sección I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

SECCIÓN II DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

Artículo 8. Esta Constitución reconoce a los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guerrero el carácter de sujetos de derecho público y a la entidad federativa una composición plurinacional con características pluriculturales, plurilingüísticas y plurijurídicas; sustentada en sus Pueblos Originarios y/o Indígenas, particularmente los Nahuas, Na' Savi, Me'phaa, Nn'anncue Ñomndaa y el Pueblo Afromexicano.

Se reconoce a la Asamblea Comunitaria como la figura máxima institucional para la toma de decisiones de los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afromexicanas.

Sus derechos y culturas se garantizarán en términos de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convenios y tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las leyes federales y la presente Constitución.

Artículo 9. La manifestación de autoadscripción o pertenencia a un Pueblo Originario y/o Indígena o Afromexicano será criterio único para determinar a qué personas aplicarán las normas relativas a éstas; mismas que están establecidas en esta Constitución y leyes que de ella emanen.

Para ocupar cargos de representación popular, la Asamblea Comunitaria será el órgano encargado de reconocer la autoadscripción.

Artículo 10. El Pluralismo Jurídico estará reconocido por esta Constitución para el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación y autonomía de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano; quienes establecerán y determinarán su condición política, su desarrollo económico, social, cultural, educativo y sus formas de gobierno que emanen de las Asambleas Comunitarias y/o instituciones que estos determinen.

Artículo 11. Los siguientes derechos se reconocen a los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, debiéndose garantizar con perspectiva de género:

I. Decidir y ejercer sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, política, económica, educativa y cultural.

II. Conservar, fortalecer y desarrollar sus Sistemas Normativos para la regulación y solución de los conflictos en sus territorios, a través de sus autoridades comunitarias y regionales; respetando los Derechos Humanos y los principios generales de esta Constitución.

III. Elegir y/o revocar a las autoridades políticas o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para el ejercicio de sus formas de gobierno interno; garantizando la participación efectiva de las mujeres originarias y/o indígenas y afroamericanas. En ese orden, se garantiza además, para acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección, la Participación Paritaria en el ejercicio del derecho de votar y ser votado.

IV. Realizar evaluaciones a sus autoridades comunitarias que se elijan por sistema normativo interno. Si de la evaluación que hagan los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afroamericano, se presume la comisión de algún delito o irregularidad administrativa, sus representantes la harán del conocimiento a las autoridades competentes; con el objeto de fincarles la responsabilidad correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de que se inicien con el proceso de revocación de mandato de las autoridades.

V. Los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afroamericano, en todo momento mediante sus propias instancias y procedimientos de toma de decisiones, podrán revocar el mandato de sus autoridades electas por el sistema normativo interno; cuando éstos violenten el derecho a la consulta, por el desempeño irregular de su cargo, atenten contra los intereses colectivos, demuestren indudable desinterés por los asuntos de sus representados o incurran en responsabilidad penal, administrativa o civil en agravio de su población. Para iniciar con el procedimiento de revocación de mandato de la autoridad electa por el sistema normativo interno, la Asamblea determinará los requisitos y el procedimiento de acuerdo a sus sistemas normativos internos; otorgándole a la autoridad a revocar la garantía de audiencia y el derecho a ofrecer pruebas.

VI. Acceder al uso y disfrute colectivo de sus tierras, territorios y recursos naturales en la forma y con las modalidades prescritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No podrán ser objeto de perjuicio o explotación mediante entidades públicas o privadas ajenas a los mismos.

VII. Preservar y enriquecer todos los elementos que constituyen su pluralidad cultural y lingüística. Las lenguas indígenas Nahuatl, Tu'un Savi, Me'phaa, N'omndaa y del Pueblo Afroamericano serán oficiales en el Estado.

Las autoridades estatal y municipal estarán obligadas a traducir, a las distintas lenguas, la información de sus programas y acciones de gobierno, destinada a los Pueblos Originarios y/o Indígenas.

VIII. Para acceder plenamente a la jurisdicción y a los mecanismos de justicia originaria y/o indígena, afroamericana y del Estado. Estos Sistemas Normativos gozan de igual jerarquía jurídica.

A.

La jurisdicción originaria y/o indígena y afroamericana consiste en aplicar sus propios Sistemas Normativos para la regulación y solución de sus conflictos; reconociendo a los órganos de los Sistemas Comunitarios encargados de la impartición de justicia, con base en sus propios reglamentos internos, respetando los derechos humanos y a los principios generales de esta Constitución.

Los tres órdenes de gobierno y las personas estarán obligados a respetar las decisiones y resoluciones de la jurisdicción originaria y/o indígena y afroamericana. Para el cumplimiento de éstas y a petición de las autoridades comunitarias, el Estado deberá auxiliarlas sin menoscabo de su autonomía o su reglamento interno.

El Estado promoverá y fortalecerá la justicia originaria y/o indígena y afroamericana. Las leyes establecerán los mecanismos de colaboración y coordinación de la jurisdicción originaria y/o indígena y afroamericana con la jurisdicción del Estado y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas; a fin de dar certeza jurídica y garantizar plenamente el Pluralismo Jurídico.

B.

La jurisdicción del Estado garantiza a las personas originarias y/o indígenas y afroamericanas, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, la atención por servidores públicos con conocimiento pleno de su lengua y cultura; debiéndose tomar en cuenta sus costumbres y especificidades, respetando los preceptos de esta Constitución.

Las personas originarias y/o indígenas y afroamericanas, que cometan alguna infracción o delito fuera de su comunidad de origen o del territorio

comunitario, podrán solicitar libremente si se someten a su jurisdicción o del Estado para que sean juzgadas; a fin de facilitar su reeducación y reincorporación a la sociedad, siempre y cuando la autoridad comunitaria lo autorice.

IX. A ser consultados de buena fe, de manera directa, libre, previa e informada y con pertinencia cultural; mediante procedimientos apropiados a través de sus Asambleas Comunitarias, regionales e instituciones representativas; cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o de desarrollo susceptibles de afectarles.

X. A proteger, preservar y conservar la integridad de sus tierras, territorios, medio ambiente, hábitat y recursos naturales; atendiendo a sus Sistemas Normativos, la Constitución Federal y los Tratados Internacionales.

XI. A participar en la creación, integración, operación y evaluación de las instituciones u organismos del Estado encargados de garantizar, proteger y promover sus derechos.

A formar parte para su integración en las diferentes instituciones del poder ejecutivo, legislativo, judicial y demás organismos autónomos del Estado.

XII. A ejercer el derecho de audiencia pública a las autoridades estatales y municipales.

XIII. A ejercer el derecho de petición a las autoridades estatales y municipales de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XIV. A no ser discriminados en ninguna de las formas o tipos por persona o autoridad alguna.

XV. A diseñar, crear, adquirir, operar y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios; en términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Tratados y Convenios Internacionales.

XVI. A la protección y/o recuperación, conservación, preservación, restauración, registro, promoción, difusión e investigación; para el reconocimiento y uso de su patrimonio cultural tangible e intangible, natural y mixto.

XVII. A la propiedad intelectual, individual y colectiva, de sus artes, sus saberes, ciencias y conocimientos.

XVIII. A la valoración, respeto y protección de sus ciencias, artes, estética, conocimientos tradicionales y

ancestrales; sus recursos genéticos, rituales, símbolos, vestimentas y aquellos de nueva creación que conserven la esencia y los saberes de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano.

XIX. A la organización y participación plena para la consulta efectiva en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas, acciones y proyectos.

XX. A la participación y representación política para elegir de acuerdo con sus Sistemas Normativos Internos a los integrantes de los ayuntamientos municipales y representantes populares indígenas y afromexicanos ante el Congreso del Estado; en los municipios de Acapulco, Acatepec, Ahuacutzingo, Alcozauca de Guerrero, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixac, Ayutla de los Libres, Azoyú, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copala, Copanatoyac, Copalillo, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Florencio Villareal, Huamuxtlán, Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoaapa, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala.

Para la composición del Poder Legislativo, el Congreso se integrará por los sujetos que resulten electos por Sistemas Normativos Internos de los pueblos Nahua, Na Savi, Me'phaa, Nn'anncue Ñomndaa y Afromexicano, mediante la figura de diputados indígenas y afromexicano reservada como curules para los Pueblos Originarios.

En aquellos municipios, con población menor del 40 por ciento de la población total con respecto a la población originaria y/o indígena y afromexicana, tendrán representación proporcional en la conformación del cabildo y la estructura orgánica del ayuntamiento, de acuerdo a su porcentaje de población total en el municipio.

Para la elección de diputados, se tomará en cuenta lo señalado en el párrafo anterior; aplicándose en ambos casos la igualdad sustantiva para la representación distrital electoral.

Artículo 12. En términos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano será basada en la composición multicultural, intercultural, multiétnica y plurilingüe; misma que será laica, gratuita, obligatoria, integral,

científica y humanista; garantizando así el respeto a la diversidad social y cultural.

Los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, en coordinación con los organismos e instituciones públicas educativas, diseñarán y desarrollarán sus instituciones y programas educativos, libros de texto gratuitos, materiales didácticos y demás estrategias pedagógicas acorde a su cosmovisión y herencia cultural e histórica; sin menoscabo de la responsabilidad del sistema educativo nacional.

El Estado garantizará el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los estudiantes originarios y/o indígenas y afromexicanos, implementando para ello un sistema de becas.

El Estado y los municipios garantizarán, de acuerdo a los planes de desarrollo de sus gobiernos, el acceso a un primer empleo a los egresados del nivel medio superior, superior y posgrados, fomentando a su vez el emprendimiento.

Para hacer efectivo el derecho de acceso a la educación pública y gratuita, los estudiantes originarios y/o indígenas y afromexicanos tendrán pase automático a las licenciaturas que oferten las universidades públicas del Estado.

Los estudiantes originarios y/o indígenas y afromexicanos de los diferentes niveles educativos tendrán acceso efectivo y de forma gratuita a los libros, uniformes escolares y otros materiales pedagógicos; así mismo, se les exentará del cobro de inscripción o de cualquier otra cuota en los planteles educativos públicos.

En las instituciones de educación de todos los niveles, la enseñanza del español y las lenguas indígenas Nahuatl, Tu'un Savi, Me'phaa, N'omndaa y del Pueblo Afromexicano será obligatoria, determinando su implementación y regulación de acuerdo a la ley reglamentaria. El Estado y los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano diseñarán las instituciones, planes y programas para la formación de profesores en educación plurilingüe.

Artículo 13. El Estado, los municipios y organismos autónomos, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas necesarias para garantizar, respetar y proteger los derechos de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano; consagrados en esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

Estableciéndose las obligaciones siguientes:

I. El Estado garantizará el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa, informada, de buena fe y con pertinencia cultural.

El Estado, municipios y organismos autónomos celebrarán consultas directas o coadyuvarán con los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, por conducto de sus propias instituciones representativas de toma de decisiones, como es la Asamblea Comunitaria; a fin de obtener su consentimiento libre, previo, informado, de buena fe y con pertinencia cultural; antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios, medio ambiente, hábitat y recursos naturales; particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, litorales, energéticos o de otro tipo. En caso de que no se obtenga la autorización de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, las partes interesadas se desistirán de continuar con el o los proyectos respectivos, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas y penales por desacato y violación a esta Constitución; y todo acto o negocio jurídico celebrado al margen de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano será nulo.

No se desarrollarán actividades militares ni de carácter policial en la jurisdicción territorial de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, a menos que se haya acordado libremente con las comunidades o que éstas lo hayan solicitado.

II. El Estado, los ayuntamientos y las autoridades comunitarias celebrarán consultas a los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, con el fin de crear e integrar una propuesta de presupuesto digna, suficiente, justa y equitativa; misma que se presentará al Congreso del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo en atención a los planes y programas propuestos.

III. La aplicación de recursos federales se hará en coordinación con las autoridades federales, estatales, municipales y de las instituciones que emanen de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano. Las partidas especiales presupuestadas para asuntos de Pueblos Originarios y/o Indígenas no podrán ser menores a las asignadas el año anterior.

IV. Priorizar e impulsar el desarrollo de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, mediante la participación de los Pueblos y la coordinación entre los órdenes de gobierno; con el fin de fortalecer las economías locales y mejorar sus condiciones de vida. Garantizando en todo momento la perspectiva de género.

V. Impulsar la enseñanza de la lectura y escritura de las lenguas de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano a través de programas acordes con la realidad comunitaria, pluricultural y plurilingüística.

VI. Reconocer a la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero (SEPOG), como una institución representativa de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano.

VII. Garantizar servicios de salud adecuados, con pertinencia cultural y acorde a la realidad comunitaria, mediante la cobertura del sistema nacional de salud; para permitir la organización y prestación de tales servicios, con la participación plena y control de los Pueblos Originarios y/o Indígena y Afromexicano; y así gocen del máximo nivel de salud física y mental.

Se respetará y fortalecerá la medicina tradicional y alternativa con sus requerimientos a través del reconocimiento de parteras y médicos tradicionales con sus respectivas prácticas ancestrales; quienes se podrán complementar, emplear y remunerar en las instituciones de salud comunitaria y estatal.

Garantizar una dieta sana con base en la cultura alimenticia de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, a través de programas de alimentación; con atención especial a los grupos vulnerables.

Los servicios básicos de salud prestados por el Estado serán totalmente gratuitos, así como las hospitalizaciones y cirugías.

VIII. Garantizar la vivienda digna y decorosa así como los espacios múltiples para la convivencia y recreación en las comunidades de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano.

IX. Garantizar e impulsar la incorporación de las mujeres originarias y/o indígenas y afromexicanas al desarrollo económico, político, social y cultural, mediante políticas públicas y acciones de gobierno; para fortalecer su educación y participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria y política en los distintos órdenes de gobierno.

X. Extender las vías y medios de comunicación y telecomunicación que permitan la integración de las comunidades, mediante infraestructura vanguardista en la materia.

XI. Garantizar que los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano diseñen, creen, adquieran, operen y administren medios, sistemas y redes de

comunicación; de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaraciones, Convenios y Tratados Internacionales de la materia.

El Estado y los ayuntamientos tomarán medidas para garantizar la transmisión de programas de radio y televisión en lengua originaria y/o indígena y Afromexicana en el territorio estatal; además deberá instruir a los medios de comunicación gubernamentales y privados a visibilizar la diversidad cultural originaria y/o indígena y afromexicana.

XII. Inhibir el fenómeno migratorio mediante programas, proyectos de desarrollo y acciones que garanticen una estrategia productiva comunitaria y condiciones de mejora económica, social, familiar y cultural; que motiven la permanencia de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano en sus comunidades.

Garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de los migrantes originarios y/o indígenas y afromexicanos que emigran dentro de la entidad federativa, a nivel nacional y en el extranjero; así como aquellos que inmigran al territorio estatal.

En los casos de migración por desplazamiento forzado, se atenderá lo señalado en el artículo sexto, fracción octava, inciso c de esta Constitución: observándose los principios rectores y estándares internacionales de protección de las personas desplazadas, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Recomendaciones de los mecanismos garantes no jurisdiccionales, nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y los informes y pronunciamientos del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

Procurar y garantizar las condiciones más favorables a los jornaleros agrícolas provenientes de los pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano al momento de ser contratados; percibiendo un salario digno, decoroso, justo y suficiente; generar las condiciones adecuadas en sus centros de trabajo; y en consecuencia acceder a los servicios de salud y a las prestaciones de ley; así mismo demandar y exigir sus derechos laborales, a través de los órganos administrativos y/o jurisdiccionales.

Apoyar la creación de unidades de atención municipal y programas especiales de coordinación estatal y nacional en materia de educación, salud y nutrición a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de familias migrantes provenientes de los Pueblos Originarios y/o

Indígenas y Afromexicano; protegiendo, promoviendo, respetando y difundiendo sus derechos humanos y su diversidad cultural.

Todo lo anterior conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, atendiendo a su mecanismo de vigilancia; y demás Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales de la materia.

XIII. Garantizar la participación libre, previa, informada, de buena fe y con pertinencia cultural de los Pueblos Originarios y/o Indígena y Afromexicano en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas públicas, planes y programas de desarrollo estatal, regionales y municipales; incorporando las recomendaciones y propuestas que realicen sus organizaciones representativas y/o autoridades comunitarias.

XIV. Garantizar el derecho de audiencia pública ante las autoridades estatales y municipales a los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano

La solicitud de audiencia pública se presentará por escrito, haciéndose mención del asunto que se pretende abordar. Recibida la solicitud, se dará respuesta por escrito en un plazo no mayor de ocho días posterior a la recepción de la misma. En caso de no hacerlo, la autoridad estará obligada a celebrar la audiencia pública dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del primer plazo.

El Congreso del Estado, como órgano parlamentario, garantizará legislativamente que el resultado de la audiencia y la participación abierta sea influencia plena y efectiva, respecto de la propuesta de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano.

XV. El poder ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos autónomos del Estado deberán integrar dentro de sus organigramas a personas de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano; de acuerdo a la proporción del número de habitantes de éstos.

XVI. Las autoridades estatales, municipales, y organismos autónomos deberán a rendir informes sobre su gestión a los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano; evaluando con ello la actuación de los servidores públicos.

Dichas autoridades rendirán informes semestrales físicos y/o financieros, los cuales se harán en las lenguas

originarias y/o indígenas Nahua, Tu'un Savi, Me'phaa, N'omndaa y del Pueblo Afromexicano.

XVII. Reconocer la evaluación que realicen los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano a sus autoridades y en su caso la revocación de mandato que realice la Asamblea Comunitaria a sus autoridades.

XVIII. Reconocer a los municipios originarios y/o indígenas y afromexicanos.

XIX. Para el ejercicio de su autonomía y libre determinación, el Congreso del Estado aprobará la creación de nuevos municipios dentro de los existentes, cuando lo soliciten los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano. Mismos que por su condición histórica, geográfica, cultural y socioeconómica así lo consideren. La segregación o adhesión municipal será decisión de la Asamblea.

La intención propia será justificación estadísticamente poblacional por tratarse de un territorio con ciudadanos provenientes de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano, la cual amerite constituirse autónomamente como una entidad política y administrativa que les permita detonar su desarrollo y elevar su nivel de vida.

Artículo 14.- El Estado reconoce y garantiza las acciones que implementen los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano dentro de su jurisdicción en la impartición de justicia, seguridad pública, prevención del delito y reeducación de los detenidos; con sujeción a sus Sistemas Normativos, prácticas tradicionales y/o reglamento interno. La relación de cooperación y coordinación se establecerá entre los Sistemas Normativos Internos y el sistema jurídico tradicional, fundada en el reconocimiento pleno del pluralismo jurídico y en el respeto a la jurisdicción y autonomía de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano. El seguimiento de la misma relación se dará a través de sus propias autoridades.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias garantiza la procuración e impartición de justicia con jurisdicción plena en el territorio comunitario.

El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria garantiza la seguridad pública, prevención del delito y reeducación de los detenidos, contemplando sus prácticas tradicionales y/o las contenidas en el reglamento interno de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afromexicano.

Se establecerá una relación de cooperación y coordinación entre los Sistemas Normativos Jurídicos originarios y/o indígenas y afroamericanos y el sistema jurídico estatal, fundado en el respeto pleno a los Sistemas Normativos de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afroamericano, con el reconocimiento del pluralismo jurídico.

La ley reglamentaria existente establecerá la delimitación de competencias de los Sistemas Normativos de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afroamericano; así como la vinculación y coordinación que exista entre estos y el sistema de seguridad estatal.

El sistema comunitario, a través de sus casas de justicia, mantendrá vinculación, coordinación y convendrá con los órganos correspondientes del poder judicial y del poder ejecutivo, en las distintas materias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los Pueblos Originarios y/o Indígenas y Afroamericano en proceso, juicio y compurgación de sanción.

TITULO DÉCIMO
MUNICIPIO LIBRE
SECCION I DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 171. Los municipios ejercerán sus competencias a través de un órgano representativo de elección popular directa y deliberante denominado Ayuntamiento, de concejos municipales y/o de las estructuras de gobierno comunitarias que decida la Asamblea a través de sus Sistemas Normativos Propios, en los términos dispuestos en la ley;

1. Los Ayuntamientos ejercerán el gobierno municipal y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y los Poderes del Estado;

Los consejos municipales ejercerán su forma de gobierno municipal, y no habrá autoridad intermedia alguna entre éstos y los Poderes del Estado;

Las formas de gobiernos comunitarias que se decidan a través de la Asamblea de los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afroamericanas, y no habrá autoridad intermedia alguna entre éstas y los Poderes del Estado;

2 Los Ayuntamientos constitucionales se instalarán el 30 de septiembre del año de la elección; y, H. Congreso del Estado de Guerrero

3. Las estructuras de gobierno comunitarias se instalarán el día que decida la Asamblea;

4. La administración pública municipal se conformará y organizará según determine la ley respectiva.

5. La administración pública municipal comunitaria se conformará y organizará según lo determine la Asamblea.

Artículo 172. Los Ayuntamientos se integrarán por un presidente municipal, síndicos y regidores, en los términos dispuestos en la ley y abrirán válidamente sus sesiones con la mayoría de sus integrantes. En caso de municipios indígenas, se integrará a las autoridades comunitarias de acuerdo a lo que determine la Asamblea a través de su Sistema Normativo Propio.

1. Satisfecho el quórum de asistencia, las resoluciones del Ayuntamiento se tomarán conforme al principio de mayoría, salvo cuando esta Constitución o la ley determinen una votación distinta;

2. Con sujeción a la Ley y siempre que se reúnan los requisitos que la misma establezca, en las localidades más importantes de cada municipio, habrá comisarías municipales de elección popular directa. En los casos de los municipios indígenas, se elegirán a las autoridades de las localidades de acuerdo al Sistema Normativo Propio. Los Ayuntamientos también contarán con Consejos de Participación Ciudadana, que coadyuvarán a la mejor atención de las materias de interés vecinal;

3. En los municipios constitucionales, la seguridad pública estará a cargo de una policía preventiva bajo el mando del Presidente Municipal en los términos de la ley estatal correspondiente. En los municipios indígenas, la seguridad pública estará a cargo de sus propias autoridades encargadas de la administración, procuración e impartición de justicia. En colaboración, los municipios constitucionales o indígenas podrán celebrar convenios en la materia de seguridad pública con los gobiernos Federal y Estatal. En los municipios constitucionales, la policía acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en los casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

4. Los Presidentes municipales rendirán ante el Ayuntamiento un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal. El informe tendrá carácter público; y,

5. Una ley orgánica regulará lo relativo a la organización, integración, funcionamiento y ámbito de competencia de los municipios y sus Ayuntamientos.

Artículo 173. Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un ayuntamiento se requiere cumplir con los

requisitos previstos en el artículo 46 de esta Constitución, ser originario del municipio que corresponda o con una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

En la conformación de la estructura de los concejos municipales comunitarios y/o las formas de estructura comunitarias que decida la Asamblea, los requisitos serán propuestos por la Asamblea.

Artículo 174. La elección de los miembros del Ayuntamiento será mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, en los términos que disponga la ley electoral respectiva.

1. La jornada electoral para la elección de miembros del ayuntamiento se llevará a cabo el primer domingo de junio del año que corresponda;

2. En la jornada electoral se elegirá un Presidente Municipal y los Síndicos y Regidores que poblacionalmente se establezca en la ley de la materia;

3. Los Regidores serán electos mediante el principio de representación proporcional;

4. En ningún caso un Ayuntamiento se integrará con menos de seis regidores; y,

5. Cada candidatura se integrará con un propietario y un suplente del mismo género.

6. La elección de los miembros de las estructuras de gobierno comunitarias se guiará por los Sistemas Normativos Propios de los Pueblos y Comunidades Originarias y/o Indígenas y Afromexicanas. El día de la elección de las autoridades comunitarias será establecido por la Asamblea.

Artículo 176. Los presidentes municipales, síndicos y regidores deberán rendir la protesta constitucional de su cargo el día de la instalación de los Ayuntamientos que integran, que será el día 30 de septiembre del año de la elección.

1. El período de ejercicio de los integrantes de los Ayuntamientos será de tres años, con posibilidad de reelección inmediata por un sólo periodo constitucional, bajo las siguientes bases:

I. La postulación para los efectos de la reelección inmediata sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que haya

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en calidad de candidatos independientes; y,

II. Los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes. Quien así contienda lo hará siempre bajo la misma calidad, no pudiendo ser postulados por un partido político o coalición en tratándose de la reelección inmediata; H. Congreso del Estado de Guerrero

2. Quienes hayan sido designados en Consejo Municipal o como suplentes, podrán ser electos para el período inmediato de conformidad con las bases anteriores; y,

3. Los miembros de los Ayuntamientos son sujetos de responsabilidad política, penal y administrativa de conformidad con el Título Décimo Tercero de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

4. Los concejos municipales y/o las formas de gobierno comunitarias asumirán el cargo de sus funciones el día que lo establezca la Asamblea.

5. La duración en el ejercicio de las funciones de las autoridades comunitarias lo determinará la Asamblea.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. En términos del artículo 199, numeral 1, fracción III y 67 párrafo tercero, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en relación con el diverso 295 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en vigor, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad para los efectos conducentes.

Artículo Segundo. Una vez acontecida la circunstancia prevista en el artículo 199, numeral 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, procédase de inmediato a formular la declaración correspondiente.

Artículo Tercero. Emitida la declaratoria referida en el punto que antecede, de manera inmediata remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento y efectos constitucionales procedentes.

Artículo Cuarto. La presente adición constitucional entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Artículo Quinto. Para conocimiento general y efectos legales procedentes, publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria y en la página de internet de este Congreso.

Dado en el Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, el día ____ de noviembre del año dos mil diecinueve.

Diputado Aristóteles Tito Arroyo

El Presidente:

Gracias, diputado.

Esta Presidencia, turna la presente iniciativa de decreto a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.

PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS Y PROPOSICIONES DE ACUERDOS

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, Proyectos de leyes, decretos y proposiciones de acuerdos inciso "a" solicito a la diputada secretaria Perla Xóchitl García Silva, dé lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos.

La secretaria Perla Xóchitl García Silva:

Con gusto, diputado presidente.

DICTAMEN QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS.

HONORABLE PLENO:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 4 de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de este H. Congreso, somete a su más alta consideración el siguiente:

DICTAMEN

QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS.

PREÁMBULO

El presente Dictamen contiene el análisis de la Minuta con proyecto de Decreto remitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-9290.11 para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna.

La finalidad de la Minuta con proyecto de Decreto consiste en reformar el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El dieciséis del presente mes, mediante oficio DGPL-1P2A.-9290.11, se recibió por oficialía de partes, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.

SEGUNDO. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se turnó dicho proyecto de Decreto a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de este Congreso, para los efectos previstos en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, mediante oficio No. LXII/2DO/SSP/DPL/0857/2019, suscrito por el Secretario de Servicios Parlamentarios de este Congreso.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Guerrero está a cargo de sus poderes locales en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución General, y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Segundo. Que de conformidad con los artículos 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 4, 5, 161 y 162 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Guerrero, Número 231, el Poder Legislativo se deposita en un órgano denominado Congreso del Estado integrado por representantes populares denominados Diputados, y funcionará a través de la Legislatura correspondiente.

Para el caso de las tareas legislativas, dicho funcionamiento será en Pleno, Comisiones y Comités que serán de carácter permanente, además de contar con una Mesa Directiva, un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios o representaciones que integren al Pleno.

Tercero. Que según lo dispuesto por los artículos 61, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con el diverso 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, el Congreso del Estado tiene la facultad, entre otras, la de ejercer las atribuciones que le correspondan dentro del procedimiento de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 343 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero establece que el Dictamen que se emita deberá concluir con la propuesta para aprobar o no el contenido de la Minuta. Por lo cual, no existen atribuciones que permitan hacer modificaciones al texto normativo contenido en la Minuta con proyecto de Decreto enviado y que fue aprobado por el Congreso General de conformidad con el procedimiento legislativo. En consecuencia, el presente Dictamen culminará con la determinación que apruebe, o en su caso, rechace la determinación a la que arribó el Congreso de la Unión.

Cuarto. Que de conformidad con los artículos 161 y 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, las Comisiones Ordinarias son órganos de carácter permanente constituidos por el Pleno que, a través de la elaboración de Dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Quinto. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 195, fracción II y 196 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guerrero, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos es una Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo con carácter permanente.

Asimismo, según los artículos 174, fracción II y 175 de la ley mencionada, disponen que las Comisiones, tienen

entre otras atribuciones, la de dictaminar los asuntos que les sean turnados y que, en el cumplimiento, éstas se sujetarán a los procedimientos establecidos en la ley referida y demás disposiciones legales aplicables.

Por cuanto hace a la competencia, de conformidad con el artículo 196, ésta concierne en lo general a sus respectivas denominaciones. De tal modo que, si la Minuta con proyecto de Decreto turnada contiene la reforma al párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia condonación de impuestos, resulta claro que la competencia para pronunciarse corresponde a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de este Congreso.

Sexto. Que previa convocatoria, la Diputada y Diputados integrantes de esta Comisión se reunieron el dieciséis de diciembre del presente año, a efecto de llevar a cabo el análisis de la Minuta con proyecto de Decreto de mérito en lo relativo a su aprobación, o en su caso rechazo, de lo cual como se ha referido en el presente Dictamen, contiene la intención de reformar el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.

Séptimo. La Minuta con proyecto de Decreto, es del contenido siguiente:

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS.

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...
...
...
...
...
...

Resulta esencial remarcar que, tal y como se señala, la prevalencia de una práctica perniciosa (a través de la condonación de impuestos, que aunque se realiza al amparo de la ley) respecto de la obligación constitucional, de que todos los mexicanos contribuyan a los gastos públicos, ésta se realiza de manera desproporcional e inequitativa entre los sujetos obligados al pago de impuestos, y por tanto no ha cumplido con el fin para la que se previó en la Ley, que era el evitarla desaceleración económica.

Acertadamente, se refiere que la condonación de impuestos es una atribución del Titular del Ejecutivo Federal, quien la ejerce a través de una facultad mediante resoluciones de carácter general con las que pueda condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios Asimismo, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Para hacer efectivo lo anterior, el Titular del Ejecutivo Federal emite decretos con el fin de normalizar la actividad económica en sectores cuando se considera necesario. Sin embargo -se sostiene en el proyecto de Decreto- que dicho fundamento se ha prestado a distorsiones, al punto de aprobar condonaciones generalizadas que merman las finanzas públicas y desequilibran la carga fiscal de la sociedad en detrimento de los contribuyentes cumplidos.

Sobre el particular, esta Comisión Dictaminadora coincide con las consideraciones que se sostienen en la Minuta, no obstante, de que se aprecia que se realizaron modificaciones a las iniciativas presentadas, entre ellas a la enviada por el Ejecutivo Federal.

Ahora bien, el punto esencial de la Minuta que se analiza, consiste en que del texto reformado, se establecerá la prohibición de condonación de impuestos, una práctica que en administraciones pasadas era tan común, lo que aún y cuando sobre esta costumbre se actuaba con el apoyo de la ley, ello provocaba una práctica nociva para las finanzas públicas. De modo tal que, según las estadísticas referidas en la argumentación del proyecto de Decreto que se analiza, las condonaciones autorizadas mermaban en demasía la recaudación de recursos, afectando a las actividades científicas y tecnológicas, haciendo palpable el resultado en el ejercicio fiscal del presente año que está a punto de finalizar.

De tal circunstancia, esta Comisión Dictaminadora considera una decisión acertada lo que se subraya en la Minuta con proyecto de Decreto, en el sentido de que dejar sin efectos los Decretos por virtud de los cuales fueron condonadas las deudas fiscales.

Lo anterior, porque sostenemos que tal privilegio de condonación era una medida -aunque amparada en la ley- desproporcional, y generaba efectos negativos en la recaudación de los recursos públicos, esto es, una afectación considerable en las finanzas públicas.

Estamos conscientes que una medida de esta naturaleza plasmada en la Constitución, conducirá a la protección del presupuesto, y que por ese motivo, los recursos tributarios se verán afectados de manera positiva.

Con ello, el Estado Mexicano mantendrá vigente el principio rector de justicia tributaria. De igual manera, el principio de igualdad que deben tener todos los contribuyentes al no permitir excepciones que beneficien con la condonación.

Sobre este caso, no se debe omitir el hecho de señalar que las exenciones y estímulos fiscales, como se subraya en las consideraciones del proyecto de Decreto, las entidades federativas y sus municipios, así como la Ciudad de México y sus alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las establecerán en casos necesarios para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la inversión productiva, sin que para ello se pierda la preservación de la rectoría del Estado.

Por esa causa, coincidimos con lo establecido en el segundo artículo transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto que se analiza, para que las Legislaturas del país y el Congreso de la Unión, cada cual, en el ámbito de sus competencias, adecuen su legislación conforme al texto reformado del párrafo primero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa disposición, se da la instrucción de que, en la legislación secundaria, en observancia a los efectos de la prohibición de la condonación de impuestos, tanto a la federación como a las entidades federativas, con la finalidad de evitar afectaciones a la hacienda pública y a los ingresos de las Entidades Federativas. Igual fin operará para los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

De ahí que consideremos viable aprobar en sus términos la Minuta analizada; en consecuencia,

SE DICTAMINA

Con el permiso de esta Mesa Directiva.

Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Medios de Comunicación.

A nombre de los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales Jurídicos, me permito exponer las razones que fundamentan el presente dictamen que aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos, remitida por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Una vez analizada, los integrantes de la Comisión Dictaminadora arribamos a la conclusión de aprobarla en sus términos al considerar justo que exista la base constitucional para establecer la prohibición de condonar impuestos a deudores fiscales que se propone en el texto contenido en el párrafo primero del artículo 28 de la Constitución.

La esencia de la reforma constitucional, consisten en eliminar esta facultad que si bien ha tenido sustento legal, no deja de ser una atribución que en su ejercicio resulta pernicioso por el daño que produce a las finanzas públicas, análisis en el tema han demostrado entre 2007 y 2018, se condonaron impuestos que equivalen a 400 mil millones de pesos a valor actual, concentrándose el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales a favor de 108 grandes contribuyentes.

En el presente dictamen apoyamos el objetivo del Congreso de la Unión de acabar con beneficios particulares, cobijados por la influencia en las esferas del poder, de alcanzar la declaratoria constitucional no habrá más condonaciones de impuestos a los grandes deudores fiscales.

Por ello, la imperiosa necesidad de acabar con la discrecionalidad que hasta hoy permite esta práctica, el espíritu que motiva la reforma constitucional en estudio, vela por evitar la dispersión de los recursos públicos a favor de las necesidades de la población que tendrá una mayor recaudación fiscal, de esta manera estamos plenamente convencidos al igual que el Congreso de la Unión de que con esta reforma constitucional se protegerá el presupuesto y tendrá eficacia en el impacto con los recursos tributarios.

De ahí que los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, consideramos aprobar la minuta en sentido favorable.

Es cuanto, diputado presidente.

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia, atenta a lo dispuesto en el artículo 165 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, somete para su discusión en lo general, el dictamen con proyecto de decreto de antecedentes.

Por lo que se solicita a las ciudadanas diputadas y diputados, que deseen hacer uso de la palabra lo hagan del conocimiento de esta Presidencia para elaborar la lista de oradores.

En virtud de que no hay oradores inscritos, se declara concluido el debate por lo que con fundamento en los artículos 266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado número 231 y en correlación con el artículo 266 primer párrafo se pregunta a las diputadas y diputados si desean hacer reserva de artículos.

En virtud de que no hay reserva de artículos se somete a consideración de esta Plenaria para su aprobación en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto de antecedentes.

Ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse manifestarlo en votación económica poniéndose de pie.

A favor.

En contra.

Abstenciones.

Se aprueba por unanimidad de votos en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto de referencia; emítase el decreto correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.

Esta Presidencia, instruye se realice lo conducente a lo que refiere el artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, al dictamen ya aprobado.

INTERVENCIONES

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, intervenciones, inciso "a" se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Valencia Cardona, hasta por un tiempo de diez minutos.

La diputada Erika Valencia Cardona:

Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

El día martes 10 de diciembre del año en curso, fue asesinado en el municipio de Huamuxtlán, región de la Montaña de Guerrero, el ciudadano Manuel Alejandro Gutiérrez, quien fuera comandante de la Policía Comunitaria CRAC, en esa misma región.

Haciendo mención que anteriormente han sido asesinados otros miembros de la policía comunitaria, como es el caso de Antonio Ramírez Rincón, el profesor Domingo España, Gabino Santos y su hijo.

Sin olvidar que hace apenas unos días fue encontrado sin vida el luchador social Arnulfo Cerón Soriano, sumándose a la lista de los lamentables hechos de violencia que se vive en nuestra región de la Montaña y en todo el Estado.

Por eso desde esta Tribuna exijo una vez más al gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado, realizar una investigación a fondo del asesinato del comandante Antonio Alejandro Gutiérrez, así como implementar medidas contundentes para la prevención de esta ola de violencia que se vive en la región de la Montaña.

Por otra parte, solicito la intervención del gobierno Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública para que la Guardia Nacional, apoye en el combate a la delincuencia en nuestra región de la Montaña. Así como a la Fiscalía General de la República para que coadyuve en la investigación y esclarecimiento de este cobarde homicidio.

Ya basta de que en nuestro estado de Guerrero, se sigan asesinando a las mujeres y hombres que abanderan las causas sociales y luchan por la seguridad de sus comunidades, silenciarlos no resolverá este tipo de problemas, por ello, se requiere una actuación más eficaz de parte de la autoridades encargadas de la seguridad pública y desde nuestra área de competencia coadyuvar en la solución.

Es cuánto.

El Presidente:

Muchas gracias, diputada.

Ciudadanas diputadas y diputados, les solicito por favor ponerse de pie.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 13:31 horas):

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, Clausura, inciso “a” y no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 31 minutos del día martes 17 de diciembre del 2019, se clausura la presente sesión y se cita a las ciudadanas diputadas y diputados, integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el día jueves 9 de enero del 2020, en punto de las 11:00 horas para celebrar sesión.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Antonio Helguera Jiménez
Movimiento de Regeneración Nacional

Dip. Héctor Apreza Patrón
Partido Revolucionario Institucional

Dip. Celestino Cesáreo Guzmán
Partido de la Revolución Democrática

Dip Manuel Quiñonez Cortes
Partido Verde Ecologista de México

Dip. Leticia Mosso Hernández
Partido del Trabajo

Dip. Arturo López Sugia
Movimiento Ciudadano

Guadalupe González Suástegui
Partido Acción Nacional

Secretario de Servicios Parlamentarios
Lic. Benjamín Gallegos Segura

Director de Diario de los Debates
Ing. Pedro Alberto Rodríguez Dimayuga